

DE LA GÉNERO Y POLÍTICAS INSEGURIDAD

Una mirada feminista a los impactos
de la militarización de Occidente

Autoría: Nora Miralles



Publicado por:



Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Carrer Erasme de Janer 8, entresol, despatx 9

08001 Barcelona

T. 93 441 19 47

www.centredelas.org

info@centredelas.org

Con la colaboración de Guillem Mases Gavalrà

Con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Barcelona, enero de 2019

Diseño y maquetación: Esteva&Estêvão

Foto de portada: Adolfo Lujan; p. 5: Wikimedia Commons; p. 7, 12, 17, 22, 27: Adolfo Lujan; p. 9: brefoto;
p. 19: Shaun Dawson; p. 30: Rafal Zambrzycki

D.L.: B-19744-2010

ISSN: 2013-8032



ÍNDICE

Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	7
2. El gobierno de la inseguridad y la cruzada contra el género	9
2.1 La inseguridad como forma de gobierno	9
2.2 Masculinidad, identidad blanca, seguridad y poder	10
3. Sacudiendo los cimientos: las teorías feministas sobre la seguridad	12
3.1 La violencia cotidiana y la necesidad de una seguridad feminista ...	12
3.2 Una introducción a las teorías feministas sobre seguridad	13
3.3 Las críticas a la seguridad humana desde el género	14
4. Metodología de los análisis de casos	17
4.1 Estructura del análisis e indicadores	18
5. Las dimensiones de la inseguridad de género en occidente	19
5.1 Estados Unidos de América, un ejército de 40 millones de pobres	19
5.2 Inseguridad de género en la fortaleza europea	26
Conclusiones	35
Bibliografía	37
Anexo	39



RESUMEN EJECUTIVO

Los derechos de las mujeres y de las identidades sexuales y de género no normativas se encuentran, en todo el mundo, pero también en Occidente, bajo una amenaza que ya ha comenzado a erosionar avances que creíamos sólidos y que pueden llevar a corto plazo a un aumento de las desigualdades de género –incluso de las formales–, así como de las violencias directas y estructurales y, en especial, de la impunidad que las ha sostenido hasta ahora. El auge de la extrema derecha populista, derecha radical ultraconservadora y movimientos antiabortistas y contrarios a la "ideología de género", un eufemismo que engloba el derecho al propio cuerpo y la denuncia de la violencia, la educación sexual y la normalización de la diversidad sexual, augura un periodo oscuro para las libertades. Especialmente, en lo que se refiere a las personas migradas y racializadas, por el carácter profundamente xenófobo que caracteriza y unifica a esta extrema derecha, que ya gobierna –sola o en coalición– en los Estados Unidos y en 10 países europeos, encabezados por Italia, Hungría y Polonia.

El crecimiento de opciones políticas antiderechos se entronca con un retorno a la idea de seguridad nacional como máxima prioridad, centrada en la protección del Estado por medios militares. El militarismo creciente, que se concreta en un discurso marcadamente bélico, el aumento generalizado del gasto militar y el desarrollo de técnicas de control y de vigilancia masiva en el marco de la Guerra Global contra el Terrorismo, penetra en los cuerpos y las vidas cotidianas de las personas, condicionando profundamente las relaciones entre estas y haciéndolas más violentas, deshumanizando a las consideradas "otras" y desviando recursos económicos de partidas sociales. En un momento, además, en el que la desregulación estatal y la acumulación de capital han extremado la brecha entre ricos y pobres.

Este empobrecimiento, que se ensaña especialmente con las mujeres y las personas LGBTI, ha llevado a su vez a estas opciones abiertamente racistas y misóginas a ganar terreno y poder, aprovechando el descon-

tento social, la ruptura de los vínculos y el miedo, bajo la promesa de un retorno a un supuesto pasado de "orden y seguridad". Un pasado que inevitablemente conlleva el retorno a la familia patriarcal, un enclaustramiento de las mujeres en el espacio privado y de las sexualidades disidentes en el armario de la invisibilización y el olvido.

Partiendo de la premisa de que sólo una seguridad que ponga el foco en las experiencias cotidianas de discriminación y violencia estructural que sufren las personas permitirá retejer vínculos y vivir libres de necesidad y de miedo, este informe recoge las apor-

taciones de los Estudios Feministas en el campo de la seguridad, para determinar los impactos materiales de la securitización de Occidente. Impactos que ya se dejan ver en forma de inseguridad económica y de trasiego para la sostenibilidad de la vida; de inseguridad comunitaria, persecución de la migración y discriminación de minorías étnicas y raciales; de inseguridad personal y física agravada por el refuerzo de estereotipos que alimentan las violencias de género y la impunidad, y de más inseguridad en el acceso a la salud. Especialmente, de la salud sexual y reproductiva, siendo el derecho al aborto uno de los principales enemigos a abatir para estos grupos.

1. INTRODUCCIÓN

“Género y políticas de la inseguridad. Una mirada feminista a los impactos de la militarización de Occidente” se enmarca en la ola de gobiernos populistas de derecha radical y de extrema derecha, caracterizados por un discurso autoritario y xenófobo, que propugna un retorno al paradigma de la seguridad militar y centrada en el Estado, marcada por las victorias de Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orban en Hungría, Rodrigo Duterte en Filipinas o Iván Duque en Colombia. También por la llegada al poder en Italia del gobierno del M5S y la Lega, cuya cara más visible es el ministro de Interior Matteo Salvini, o la coalición actual entre conservadores y ultraderecha que gobierna Austria. Todos ellos caracterizados, a su vez, por discursos y políticas en defensa de la familia tradicional que señalan, como objetivo a combatir, los derechos sexuales y reproductivos conseguidos en las últimas décadas por los movimientos feministas y de liberación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).

El informe, que forma parte de la línea de investigación del Centre Delàs en Género y Militarismo y es su tercer trabajo publicado, pretende contribuir a determinar los impactos que el contexto actual de securitización y militarización en Occidente, iniciado tras los atentados yihadistas de principios del nuevo siglo y agravado por el afloramiento de este tipo de gobiernos, pueden generar y están generando en las vidas, cuerpos y derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Impactos en el plano simbólico como material, que puedan agravar la situación de inseguridad y precariedad permanente en que estos sujetos ya vivían porque en ellos la violencia se manifiesta como un continuo.

El punto de partida del informe es la conflictiva relación entre el género y la seguridad, la tensión entre las diferentes concepciones sobre el término y las aportaciones que los estudios feministas han realizado para entender la seguridad y la inseguridad como experiencias subjetivas, determinadas por la identidad social e individual y por las diferentes violencias estructurales que condicionan nuestras vidas. Asimismo, se busca aterrizar los dilemas que plantea esta securitización, mediante el análisis de diferentes casos en el marco de los países occidentales.

Por lo que el informe consta de:

- Un primer capítulo, “El gobierno de la inseguridad y la cruzada contra el género”, en el que se analizan las causas que han motivado el auge

de opciones políticas militaristas, xenófobas, sexistas y homófobas en Occidente y en el mundo en general, el fracaso del Estado como protector y la relación estrecha entre inseguridad y precariedad económica, así como el retorno a posturas tradicionales sobre la seguridad y el género.

- El segundo capítulo, "Sacudiendo los cimientos: las teorías feministas sobre la seguridad", relaciona en un plano teórico el género, el militarismo y la seguridad, desde la respuesta a las teorías realista y liberal, que colocan el estado en el centro de la seguridad, pero también desde la revisión crítica de teorías progresistas e inclusivas, como la Seguridad Humana. En él, se busca una perspectiva histórica sobre la aportación de las propuestas feministas en este campo, basadas en el cuestionamiento de las relaciones de poder, la concepción de las violencias y de la inseguridad como un continuo y la necesidad de una transformación radical de las estructuras sociales para alcanzar la seguridad.
- En el tercer y último capítulo se realiza un análisis práctico del contexto actual desde los Estudios Feministas sobre Seguridad, centrado en los Estados Unidos y en aquellos países de la Unión Europea en que se triangulan de forma muy clara el liderazgo de la derecha y la ultraderecha populista, la militarización y securitización del país y los impactos y experiencias concretas de inseguridad relacionadas con el género, como son Italia, Hungría y Polonia, con mención a Francia, España o Austria.

Considerando la voluntad de hacer partir este informe desde una posición emancipadora, que concibe la seguridad como ausencia de amenazas a la vida y a la integridad de las personas (Booth, 1991: 319) y no únicamente como ausencia de violencias directas o de amenazas a la integridad del Estado, se analizan únicamente los casos más representativos en Occidente, evitando conscientemente la actitud paternalista y colonialista que limita la seguridad y los Derechos Humanos a algo que hay que exportar a pueblos del Sur Global. Se toma, también, una postura de responsabilidad hacia las violencias que la securitización y militarización en nuestros países, traducida por ejemplo en una mayor producción y exportación de armas, generan a nivel global.

Haciendo suyas las diferentes dimensiones planteadas por la Seguridad Humana para medir en qué se concretan la seguridad y la inseguridad, el informe

utiliza las siguientes variables en el análisis de casos, que se consideran representativas de la situación de inseguridad de género en Occidente:

- La seguridad económica y de sostenimiento de la vida
- La seguridad social y comunitaria, centrada en la vulnerabilización de personas migradas y racializadas
- La seguridad personal y la protección hacia las violencias por identidad de género u opción sexual
- La seguridad en términos de salud y, en particular, de acceso a la salud sexual y reproductiva

Se parte, pues, de la premisa de que el género es esencial a nivel conceptual, empírico y normativo para el estudio de la seguridad internacional, desde una perspectiva que no sólo amplía lo que se entiende por seguridad, también el rango de sujetos merecedores de ésta (Mendia, 2013). En el caso que nos ocupa, la mirada feminista como metodología nos ayuda a observar las dos caras con las que el populismo de extrema derecha actual se relaciona con el género. Por un lado, reforzando el elitismo y el carácter excluyente de los procesos de toma de decisiones y normalizando respuestas que pasan por desviar recursos sociales y de prevención de violencias hacia la defensa y la seguridad nacional, atacando además abiertamente los derechos de las mujeres y personas LGTBI. Y, por otra, especialmente en Europa occidental, instrumentalizando el discurso de la igualdad de género e incluso de la liberación sexual, para implementar políticas más restrictivas contra personas migradas y racializadas.

Se adopta, además, una perspectiva de género en su sentido más amplio, no centrada únicamente en las experiencias de las mujeres, también en sujetos igualmente vulnerabilizados por la violencia de actores estatales y no estatales por su orientación sexual o identidad de género. Es una toma de posición en un debate no resuelto sobre el sujeto del feminismo, ante la urgencia de romper el silencio sobre la situación específica de inseguridad de estos sujetos y una invisibilización mayoritaria en la investigación sobre paz y relaciones internacionales, e incluso en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (Hagen, 2016: 313), que se intenta contribuir a revertir desde este documento.

Se pretende, en definitiva, **aterrizar las preguntas y consideraciones que plantea la introducción del género como variable en el ámbito de la seguridad**, en su sentido más amplio y en el contexto actual.



2. EL GOBIERNO DE LA INSEGURIDAD Y LA CRUZADA CONTRA EL GÉNERO

2.1 LA INSEGURIDAD COMO FORMA DE GOBIERNO

Con la victoria electoral del excapitán del ejército Jair Bolsonaro en Brasil en octubre de 2018, la ola de gobiernos populistas de derecha radical y de extrema derecha sumaba un nuevo aliado. Si, en el ámbito global, este fenómeno está encabezado por Donald Trump en Estados Unidos, Rodrigo Duterte en Filipinas o el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, en Europa hay 10 Estados en los que la extrema derecha xenófoba forma parte del gobierno o bien ha obtenido una presencia fuerte (Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia y Suecia) y forma parte de 18 parlamentos de países europeos, entre ellos, el parlamento autonómico andaluz.

Con la seguridad nacional como punto estrella de sus programas, a menudo trufados de discursos marciales que equiparan delincuencia e inmigración y de soluciones que pasan –mayoritariamente– por un aumento del gasto en defensa, el desarrollo de nuevas armas y la militarización interna y de las fronteras, todos ellos abanderan un retorno a la visión estado-céntrica y militar de la seguridad, renacida a principios del siglo XXI tras los atentados yihadistas

en Nueva York, Madrid y Londres y el estallido de la “Guerra Global contra el Terror”.

Y es que, en los países occidentales, la seguridad ha pasado en la última década de ser una dimensión fundamental del pacto con el que nació el Estado moderno, a constituir la práctica totalidad de lo que puede esperarse de este en términos de políticas públicas.

En palabras de Michaël Foessel, el régimen securitario o de vigilancia en el que vivimos es tan acusado, que no hay, ya, discurso político o programa electoral que no haga del restablecimiento de la seguridad, es decir, del regreso a un pasado supuestamente idílico y libre de amenazas, su objetivo único o, cuanto menos, la prioridad para una acción pública creíble (Foessel, 2010: 88-94).

En el plano macro de las Relaciones Internacionales, esto implica un retorno al paradigma tradicional, una ofensiva neorrealista que asimila la seguridad con la defensa y protección del Estado y el uso y control de la fuerza militar (Walt, 1991: 212). Se impone, en los países occidentales, una noción –sobredimensionada– de la existencia de un riesgo permanente de sufrir atentados terroristas, que alterará de forma profunda el consenso sobre los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas como límite de la acción de los Estados para preservar la seguridad nacional.

Esta revitalización de la visión tradicional y militar de la seguridad, así como la victoria de fuerzas de la derecha más reaccionaria, no es una cuestión puramente técnica o política, determinada por la situación de conflictividad global, sino que va estrechamente ligada a un fenómeno económico, el de los Estados occidentales que, incapaces de ofrecer protección económica y bienestar social en un contexto de globalización feroz, privatización y desregulación y desguace del sistema público, "abordan el campo del miedo a golpe de legislación penal y de muros que esconden la debilidad de las naciones" (Foessel, 2011: 89). El Estado liberal, ante la pérdida a pasos agigantados de soberanía nacional, protagoniza un retorno estético al pacto fundacional, según el cual los ciudadanos se someten al poder del Estado para recibir seguridad y protección a cambio de legitimar su autoridad. Pero la protección, con la economía global y estatal en manos del capital privado, se traslada a un plano totalmente secundario cuando la prioridad es incrementar el beneficio. Y, cuando esta protección social desaparece, la inseguridad y el miedo se disparan (Spike Peterson, 2018: 173).

Así pues, la securitización actual de Occidente y del mundo, entendida como el despliegue de medidas de emergencia, de poderes especiales y de legitimación del uso de la fuerza en respuesta a amenazas existenciales (Buzan y otros, 1998), se explica en parte por la situación actual de descomposición social, como bien explica en una entrevista reciente la filósofa marxista Clara Ramas San Miguel. El capitalismo basado en la acumulación por desposesión de las clases populares a nivel mundial, que ha generado una brecha de desigualdad cada vez más acusada entre ricos y pobres, y la globalización neoliberal, han rasgado nuestros vínculos colectivos, abocándonos a una sensación de desorden social y a "un sentimiento de intemperie y desamparo", que de forma progresiva nos lleva a la lucha desesperada para sentirnos menos frágiles,¹ menos vulnerables. Esta sensación de precariedad, reforzada también por la inseguridad económica cotidiana y permanente, que se agrava con la derrota del Estado del Bienestar y el desmantelamiento de los derechos laborales (Lorey, 2016), empuja a millones de personas a la exclusión social y política. En este contexto, los movimientos ultraconservadores, identitarios y fascistas capitalizan la necesidad de exorcizar los miedos e incertidumbres y de expresar la rabia y desafección hacia la política institucional liberal y socialdemócrata,² ofreciendo soluciones simplistas y dos chivos expiatorios perfectos: las personas migradas, refugiadas y racializadas que viven en el país o que atraviesan sus fronteras y los derechos de las mujeres y las personas LGTBI.

1. Cuarto Poder, entrevista a Clara Ramas San Miguel, 24/09/2018: <https://www.cuartopoder.es/cultura/2018/08/23/clara-ramas-marx/>
2. Visegrad Insight, Veronika Grzebalska, "Anti-Genderism and the crisis of neoliberal democracy", 7/03/2016: <https://visegradinsight.eu/why-the-war-on-gender-ideology-matters-and-not-just-to-feminists/>

2.2 MASCULINIDAD, IDENTIDAD BLANCA, SEGURIDAD Y PODER

En esta estrategia de seguridad para la supervivencia material e identitaria del Estado-nación, el feminismo y la reapropiación que propone este de los cuerpos, las vidas y la reproducción, son una amenaza existencial, es decir, algo que requiere soluciones de emergencia dentro o fuera de la legalidad (Buzan, 1998), pues, como bien dijo el exasesor de Trump Steve Bannon, "pretende deshacerse de 10.000 de años de historia"³ del Patriarcado.

Así, las dos cruzadas que más claramente alían a todos los actores de la nueva derecha radical y a la extrema derecha populista son la defensa xenófoba de la identidad blanca y la lucha contra los avances en materia de género y opción sexual, en una contrarrevolución racista, sexista y homófoba que pretende restaurar el orden jerárquico asignado a cada uno de los roles y las categorías raciales y sexuales, asumiéndolas como hechos naturales y "de sentido común" (Garbagnoli y Prearo, 2017).

Esta reacción ultraconservadora, común en todo Occidente y Latinoamérica, responde también al miedo de los sujetos que se inscriben en la masculinidad hegemónica a la pérdida de poder, privilegios y estatus, precipitada por el empobrecimiento económico, la creciente diversidad étnica y cultural fruto de las migraciones y por la irrupción en la agenda pública y política de la lucha feminista y por la liberación sexual, con una vocación no únicamente simbólica, sino de transformar situaciones de opresión y discriminación, que inevitablemente pasan por un cambio en el modelo económico y en las relaciones de género, y por el reparto democrático del poder y del acceso al espacio de toma de decisiones.

Pero también es una consecuencia de la asunción por parte del poder y del capital de las demandas de diversidad cultural y de género, para neutralizar esta potencial redistribución de los recursos económicos, lo que ha propiciado una identificación –interesada– de la lucha feminista y por la liberación sexual con la institucionalidad burguesa y los "males" de la globalización, contribuyendo a hacer pasar por vanguardista y "políticamente incorrecto" el discurso misógino de la derecha populista radical, que empieza a estar presente también en cierta izquierda, lanzando a los hombres blancos y heterosexuales un mensaje de apoyo y camaradería ante la pérdida de privilegios.⁴

3. Independent UK, "Steve Bannon warns Trump the 'anti-patriarchy movement' will be bigger than the Tea Party", 12/02/2018: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/steve-bannon-trump-tea-party-anti-patriarchy-movement-times-up-bloomberg-breitbart-news-a8206426.html>
4. Open Democracy, "Matteo Salvini, renaturalizing the racial and sexual boundaries of democracy", 1/10/2018: <https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/sara-garbagnoli/matteo-salvini-renaturalizing-racial-and-sexual-boundaries-of-dem>

Estos líderes políticos encarnan, así, la supremacía blanca, el anti-intelectualismo, la crítica al aburguesamiento de la socialdemocracia y el desmontaje del Estado del bienestar, desde una posición ideológica que, como definiría la pensadora e investigadora feminista Rita Laura Segato, parte de un fanatismo patriarcal militante, sospechosamente afín al belicismo (Segato, 2015: 17), que agita el fantasma de la "ideología de género" como categoría de acusación. Este concepto, nacido en el seno de la Iglesia católica, une a grupos contrarios al derecho al propio cuerpo, asociaciones antiabortistas, ultracatólicos y la extrema derecha desde hace unos 5 años, en campañas y movilizaciones mundiales que cuestionan la "desnaturalización del orden sexual". Un orden, más conocido como Género, que cuestiona no sólo el carácter natural y determinado de los roles de los hombres y las mujeres, de la masculinidad y la femineidad, considerándolos construcciones sociales y culturales que cambian fruto del momento y circunstancias, sino que cuestiona también la propia existencia de dos únicos sexos. La defensa del orden patriarcal y de la familia tradicional ante la amenaza del género se concreta en una voluntad de recortar o retroceder en los avances conseguidos en materia de igualdad, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos. Se pretende el retorno a los roles tradicionales, que sirven a las narrativas sobre la seguridad nacional unos protectores –el Estado a nivel macro y los hombres a nivel micro– y unas protegidas, las mujeres. El resto, ni siquiera existe.

En este mismo sentido, retorna también la incuestionabilidad de quienes "proveen la seguridad", los actores securitizadores (normalmente líderes políticos, burocracias, aparatos estatales, gobiernos, lobbies y grupos de presión) que tienen la potestad de declarar que algo está bajo amenaza existencial y cuál es esta cosa –el objeto, estructura o grupo de personas referente– amenazada y que lucha legítimamente para sobrevivir (Buzan, Waeber y de Wilde, 1998).

Estos objetos referentes pueden ser el Estado, la soberanía nacional, una ideología o corriente política, economías nacionales, identidades colectivas, comunidades, especies o hábitats (Buzan et al, 1998). En el caso de los gobiernos analizados, con un marcado carácter xenófobo, lo que se percibe como amenazado sería la identidad blanca, la clase obrera blanca cuyos intereses dicen defender o "nuestras mujeres". Cuando un hecho, por ejemplo, la actual crisis migratoria o el yihadismo, es considerado una "amenaza a la seguridad nacional", pasa de ser un hecho politizado que requiere una gestión por parte del Estado dentro de los marcos legales, a securitizarse, lo que requiere una acción de emergencia, sea dentro o fuera

de los marcos legales, como militarizar las fronteras o someter una comunidad concreta a vigilancia masiva y permanente.

Es el proceso que los precursores de los análisis críticos sobre seguridad, la Escuela de Copenhague, llaman securitización, donde se pone de manifiesto este carácter no objetivo a la hora de designar lo que constituye o no una amenaza existencial (Buzan et al, 1998), y que es clave como base para cuestionar que, si las amenazas existenciales no son objetivas, lo que el Estado considera amenazas a su seguridad no necesariamente debe coincidir con los peligros existenciales que enfrentan sus habitantes, por lo que la seguridad estatal no se transfiere automáticamente a los individuos (Hoggensen y Rotter, 2004: 158).

Las amenazas dependen, pues, de decisiones que tienen que ver con motivaciones políticas y prioridades (Sjöberg, 2009). Esta equiparación de los intereses de Estado, nación y sociedad como una sola cosa indivisible supone un retorno a la visión realista de la Guerra Fría y aparta el foco de la seguridad como cobertura de las necesidades básicas de los individuos y de las comunidades nacionales, religiosas o étnicas, que proponen otras visiones, como la Seguridad Humana. El carácter subjetivo de la elección de las amenazas existenciales respecto a las que se necesita protección entronca, también, con una de las principales aportaciones desde el género a los Estudios sobre Seguridad, que abre las puertas a visibilizar y considerar todo el abanico de amenazas existenciales que golpean de forma cotidiana a personas y comunidades, especialmente aquellas que sufren niveles más altos de vulnerabilidad.

Así, el género es relevante en este caso no sólo por la profunda misoginia que destilan los discursos de los nuevos líderes de la geopolítica realista, sino porque es causa y consecuencia al mismo tiempo, un factor ineludible para entender las victorias de la extrema derecha militarista y xenófoba y la globalización salvaje que ha empobrecido a las clases populares en Occidente, mientras continuaba expoliando recursos del Sur Global, exponiendo a las personas a una situación de precariedad e inseguridad creciente a muchos niveles. También es imprescindible para analizar el retorno del Estado como único referente de la seguridad y de la defensa, así como de lo militar y de la securitización como prioridad absoluta por delante del sostenimiento de la vida. Y lo es para reconocer de qué manera las identidades de género y sexuales, junto con el resto de las identidades que nos configuran (clase social, raza y etnia, estatus de ciudadana o de migrada, capacidades corporales, etc.) determinan las vivencias de inseguridad y vulnerabilización que sufrimos (Mendia, 2013).



3. SACUDIENDO LOS CIMIENTOS: LAS TEORÍAS FEMINISTAS SOBRE LA SEGURIDAD

3.1 LA VIOLENCIA COTIDIANA Y LA NECESIDAD DE UNA SEGURIDAD FEMINISTA

A pesar de que no existen cifras globales actualizadas que cuantifiquen, de año a año, la incidencia de la violencia por motivos de género y opción sexual, algunas pensadoras como Rita Laura Segato o Silvia Federici hablan de un aumento global de la violencia y de la brutalidad de esta –especialmente en las fronteras entre los países del Norte y del Sur global– como manifestación y síntoma de un mundo en el que la masculinidad está permanentemente a prueba, un estatus que debe ser constantemente reproducido y demostrado ante los demás hombres. Y es en las situaciones de mayor vulnerabilidad cuando este estatus se adquiere por la vía de la fuerza, de la violencia. El hombre más letal es el sujeto inseguro.⁵

5. Revista Contexto, entrevista a Rita Laura Segato, 15/03/2017: <https://ctxt.es/es/20170315/Politica/11576/Feminismo-Violencia-de-g%C3%A9nero-Rita-Laura-Segato-La-guerra-contra-las-mujeres-Nuria-Alabao.htm>

Otros, como Caroline Kennedy, aseguran que la violencia contra las mujeres es más frecuente en las sociedades militarizadas (Kennedy, 2007: 125), por la legitimación de la violencia en general a la hora de gestionar y resolver conflictos y por la deshumanización que alimenta, y que no sólo impregna el ámbito de las políticas públicas, penetra también en los hogares y las relaciones humanas y familiares, aprovechando en su propio beneficio la división sexual del trabajo y los estereotipos que imperan en la sociedad. El militarismo y el aumento de la violencia que este lleva asociado, se presentarían desde una aproximación feminista como la mayor amenaza a la seguridad de las personas (Mendia, 2013) y, en particular, de las mujeres, lesbianas, gays y personas transexuales e intersexuales, ya que es la máxima expresión de los valores patriarcales y, además, implica la desviación de recursos desde la inversión social hacia el gasto militar, en detrimento de programas de protección social. Lo que, como veremos en el análisis de casos posterior, podría tener un impacto devastador en la economía y en el sostenimiento de millones de mujeres y personas LGBTI.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud expone que, en la región en que se centra el presente análisis, una de cada 4 mujeres ha sufrido o sufre vio-

lencia por parte de su pareja o expareja. Si ampliamos la estadística a la violencia de género física o sexual, con independencia de si el perpetrador es pareja o expareja, un 32,7% de las mujeres en Europa occidental y Estados Unidos, es decir, una de cada 3 mujeres, admiten haber vivido una situación de este tipo.⁶ La incidencia de esta amenaza entre las mujeres es, pues, extremadamente alta, pero no está considerada un input relevante de la Seguridad en mayúsculas que, bajo el paradigma realista, en palabras de Ann Tickner, "intenta explicar las causas de la guerra a través de un discurso que privilegia las visiones desde la masculinidad hegemónica" (Tickner, 1992: 3), es decir, las experiencias de una élite de entre los hombres. Tickner introducirá la necesidad de conectar los efectos de la violencia con las experiencias cotidianas de inseguridad y de reconocer el papel de las violencias estructurales en estas.

Las violencias se conectan, pues, no como fenómenos aislados, sino partiendo de la premisa de que suceden en capas que se superponen (True y Tanyag, 2018: 16) y de que existen múltiples vínculos entre la inseguridad que se vive en el espacio doméstico, en el seno de la comunidad, en el Estado y en el ámbito global, lo que Cynthia Cockburn llama "continuo de las violencias" (Cockburn, 2004). El reconocimiento de este vínculo, de esta continuidad entre las diferentes formas de violencia, es una de las principales aportaciones de las Teorías Feministas sobre seguridad, sobre todo en el marco del proceso de securitización actual, cuyas narrativas aíslan la violencia por motivos de género u opción sexual de las estructuras de poder, desigualdad y discriminación simbólica, las llamadas violencias estructurales.

De la misma manera, pues, que el sistema económico global actual genera una muy desigual distribución de autoridad, privilegios y recursos, también genera una distribución –tan desigual como la anterior– de inseguridad. Tomando en consideración las desigualdades políticas y económicas estructurales que ya existen entre hombres y mujeres, el género contribuirá a producir una distribución de inseguridades diferenciada, y las experiencias de vulnerabilidad variarán en función de si eres hombre, mujer o si no te identificas con ninguna de estas dos categorías. La globalización neoliberal y la securitización actual intensifican estas jerarquías estructurales y las inseguridades que llevan asociadas (Spike Peterson, 2018: 179). Por ello, la comprensión de los patrones de género que actúan en el despliegue de la seguridad, desde una perspectiva feminista, deviene imprescindible.

6. Informe "Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and nonpartner sexual violence" de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2013). Últimas cifras actualizadas con carácter global, que muestran la incidencia mundial de la violencia machista.

3.2 UNA INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS FEMINISTAS SOBRE SEGURIDAD

Aunque el género condiciona nuestra comprensión sobre el origen de las vulnerabilidades y amenazas que contribuyen a la inseguridad (Detraz 2012: 131), las Relaciones Internacionales, y dentro de éstas los Estudios sobre Seguridad, han sido históricamente impermeables –cuando no directamente hostiles– al análisis de género y a la perspectiva feminista, por el cuestionamiento de los ejes vertebrales que conforman las corrientes dominantes de las Relaciones Internacionales (Mendia, 2013). Hasta el punto, en palabras de Jonathan D. Wadley, de que "en ninguna parte es más ensordecedor el silencio sobre el género que en el campo de la seguridad internacional" (Wadley, 2010: 39).

Para J. Ann Tickner, pionera en el desarrollo de la perspectiva de género sobre las Relaciones Internacionales, el rol de las mujeres en la seguridad nacional e internacional realista ha sido contradictorio y ambiguo. Por un lado, han sido siempre aquellas a proteger por parte de los hombres y del Estado, es decir, han sido tradicionalmente la justificación para muchas acciones en nombre de la seguridad. En cambio, han tenido, históricamente, cero control sobre las condiciones de su protección. En nombre del racionalismo y de la universalidad, los realistas han articulado la Seguridad en mayúsculas desde un lugar muy específico, el Estado (Hoogensen, 2004: 161).

Incluso bajo el paradigma liberal, cuyo foco desplaza la centralidad de la guerra a la negociación, las necesidades de seguridad y el marco de protección han sido en muchos casos establecidos en función de las experiencias de violencia en el espacio público de un grupo concreto dentro de los hombres, en este caso, los que tienen acceso a los aparatos del Estado, excluyendo cualquier consideración sobre las experiencias y situación de las mujeres y sin ninguna revisión crítica de la parcialidad de sus análisis (Stokes, 2014: 48).

A la hora de determinar cuáles son las principales amenazas existenciales para los miembros de una sociedad, la perspectiva feminista se centra en la seguridad de individuos y comunidades, que incide en la seguridad de los Estados y de las organizaciones internacionales, aplicando una de las consignas que mejor definen el feminismo –"lo personal es político"– al ámbito internacional y de la seguridad. Lo personal es, así, internacional (Sjöberg, 2010: 24). El análisis de género observa y conecta, pues, la violencia cotidiana que sucede en la familia, en el hogar y en la comunidad con la violencia a nivel macro y las relaciones entre estados y actores no estatales (Spike Peterson, 2003).

Las Teorías Feministas sobre la Seguridad, que forman parte de los Estudios Críticos Sobre Seguridad, cuestionan este campo en defensa de una definición más amplia del término Seguridad –coincidiendo en este sentido con el resto de las teorías críticas con el realismo– que tome en consideración las voces y roles de las mujeres (Stokes, 2014: 44). En un principio, únicamente de forma cuantitativa, reivindicando un lugar para las mujeres en las instituciones del ámbito de la seguridad, para avanzar luego hacia una visión más crítica y transformadora, que busca cuestionar los fundamentos de las teorías tradicionales y romper el dogma de la seguridad como algo unívoco, a través de preguntas como, por ejemplo, ¿quién determina cuáles son las mayores amenazas existenciales y para quién? ¿Quién define e interpreta la seguridad? ¿Quién debe recibir esta seguridad? ¿Cómo se mantiene la seguridad?

Esta propuesta la resume de forma muy clarificadora Fionnuala Ní Aoláin, hoy comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la lucha contra el Terrorismo, cuando dice que “las sociedades que no son seguras para las mujeres simplemente no son seguras” (Ní Aoláin, 2011: 62). La propuesta categórica de que la condición de seguro o inseguro de un Estado depende del grado de seguridad personal y comunitaria de las personas que están más vulnerabilizadas o más inseguras (Mendia, 2013), o que son objeto de forma más frecuente de ataques a su integridad y vida, es una de las aportaciones más trascendentales, al tiempo que deliberadamente ignoradas, de la teoría feminista en este campo. Para la profesora e investigadora Irantzu Mendia, la seguridad debería ser definida por las personas que están más inseguras, teniendo en cuenta que la existencia de las mujeres y su experiencia de (in)seguridad está determinada por otros factores como su clase social, la identidad y orientación sexual, capacidades, étnico-raciales, situación legal, etc. La seguridad se articularía, pues, desde las voces inseguras (Mendia, 2013). Asociada con la vida cotidiana, las libertades y los derechos humanos, la seguridad abarcaría la protección contra las violencias en los ámbitos público y privado, la estabilidad económica, el acceso a un techo, agua y alimentos, la libertad de escoger cuándo se practica sexo o cuándo se procrea y muchas más consideraciones de las que toma el actual concepto de seguridad nacional (Stokes, 2014: 52), algunas de ellas en consonancia con las propuestas de la Seguridad Humana, una corriente teórica-práctica de la seguridad que también ha sufrido una revisión muy crítica por parte de los Estudios Feministas sobre seguridad.

En definitiva, tanto el militarismo, como la globalización y las Relaciones Internacionales, reflejan construcciones estereotípicas sobre las masculinidades

y las feminidades y perpetúan distinciones artificiales entre las esferas pública y privada, la política y la economía, la economía productiva y la reproductiva y entre los contextos “de crisis” y de “no crisis” (Sjöberg, 2010). En este sentido, la perspectiva feminista nos ayuda a cuestionar la retórica del momento de crisis actual, atendiendo a la violencia preexistente, subyacente a todas las sociedades patriarcales y capitalistas (True y Tanyag, 2018: 16), y a las injusticias que mujeres, lesbianas, gays, trans e intersexuales sufren de forma cotidiana, exacerbadas en determinadas circunstancias, ayudando a crear una perspectiva holística e integral sobre lo que significa la seguridad.

3.3 LAS CRÍTICAS A LA SEGURIDAD HUMANA DESDE EL GÉNERO

Hacia el final de la Guerra Fría, como volverá a pasar de nuevo tras el 11-S, la idea dominante y hegemónica sobre la seguridad se limitaba, mayoritariamente, al análisis de amenazas que pusieran en riesgo la estabilidad y la continuidad del Estado (Detraz 2012: 131). En los años 90 y coincidiendo con el aumento de las desigualdades económicas entre estados y dentro de los estados, tiene lugar una revisión teórica de los Estudios sobre Seguridad, en la que se cuestiona de lleno la concepción estatocéntrica y la idea de que las únicas amenazas son las militares (Pérez de Armiño, 2013).

En 1994, la Seguridad Humana salta de la formulación teórica a la aplicación en políticas públicas, siendo adoptado el término por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en su Informe de Desarrollo Humano incorpora el término, afirmando que “el concepto de la Seguridad Humana ha sido definido de forma muy limitada durante demasiado tiempo, (...) olvidando las preocupaciones legítimas de aquellos que buscaban seguridad en sus vidas cotidianas” (PNUD, 1994: 22).

Es difícil establecer una definición de Seguridad Humana, debido a que esta ha sido conceptualizada y definida de formas múltiples y bajo intereses políticos, teóricos y económicos diversos. No es, por tanto, un término unívoco, sino que presenta diferencias considerables de conceptualización y en las políticas propuestas para alcanzarla, en el grado de desafío a las visiones tradicionales de la seguridad y en su carga crítica hacia las estructuras de opresión y poder vigentes, siendo este último un fundamento importante de las críticas que recibe por parte de las corrientes más transformadoras de la seguridad, y también por parte de los Estudios Feministas sobre Seguridad.

La Seguridad Humana se bifurca en dos enfoques principales (Pérez de Armiño, 2013):

■ **Enfoque amplio:** se corresponde con la formulación original del PNUD en 1994, estrechamente vinculado al concepto de desarrollo humano, y pone el énfasis en la satisfacción de las necesidades básicas. Seguridad como situación en que las personas están libres de todo tipo de amenazas a la integridad humana, garantizando desarrollo, la vida y la dignidad. Dos dimensiones: libertad respecto del miedo (libres de la amenaza de la violencia física) y libertad respecto a la necesidad (tener las necesidades básicas cubiertas). El informe del PNUD de 1994 desglosa, además, la seguridad humana en 7 tipos concretos de seguridad: económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política.

■ **Enfoque restringido:** la versión más fácil de adoptar y asimilar desde las democracias liberales, que lo han limitado a la libertad respecto del miedo, dejando de lado la cuestión fundamental del bienestar y desarrollo y –con la justificación de “hacer el concepto más medible y operativo en la práctica de las políticas públicas”– neutralizando el contenido más transformador y el potencial crítico de esta corriente.

La Teoría Feminista sobre la Seguridad (FST, por sus siglas en inglés) problematiza el concepto dominante de seguridad y busca explicar, y sobre todo transformar, el funcionamiento del género y del poder en las Relaciones Internacionales, lo que choca con la inercia de la Seguridad Humana, a quien las corrientes más críticas acusan de haberse dejado captar e instrumentalizar por los poderes occidentales (Pérez de Armiño, 2013), especialmente en el marco de la Guerra Global contra el Terror, desnudándose de su contenido crítico y transformador y siendo utilizado cada vez más para justificar políticas de ayuda internacional ligadas a intereses de seguridad nacional (Mendia, 2013).

Una de las mayores críticas desde el feminismo a la Seguridad Humana es la falta de inclusión del género como variable que determina experiencias de inseguridad, de forma transversal (Detraz, 2012: 139), empezando por el riesgo de enmascarar diferencias bajo el término humano/a (Hudson, 2005) e invisibilizando las diferencias y desigualdades internas que esta pretendida universalidad oculta, del mismo modo en que lo hacen las propuestas conservadoras sobre seguridad. Hoogensen y Vigeland sugieren la necesidad de dotar a la seguridad humana de perspectiva de género para exponer cómo las necesidades de seguridad individuales varían en función de la pertenencia a un determinado grupo u otro, visión que refleja la relación interdependiente entre las dimensiones individual y social que propone el pensamiento feminista (Hoogensen y Vigeland, 2004).

Más allá todavía: el debate sobre agencia y securitización de las violencias

Dentro de la teoría feminista, como corriente de pensamiento y análisis extremadamente diversa, existen miradas divergentes en cuanto al abordaje de las desigualdades, y también sobre la relación a establecer con la seguridad, con la securitización, con el Estado y con la gestión de las amenazas. Si bien parece que es una opinión mayoritaria que las principales amenazas contra los cuerpos y las vidas de las mujeres, como la violencia doméstica y violencia de género o la inseguridad económica y alimentaria, generan una situación de vulnerabilización, existe un disenso profundo en algunas corrientes del feminismo sobre cuál debe ser la respuesta a esta constatación y si ésta pasa por constreñir las demandas en marcos normativos.

Las limitaciones de esta asunción de las demandas de seguridad por parte del sistema y de la institucionalidad tiene traducciones claras en la llamada Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que a su vez es una de las grandes victorias en cuanto a reconocimiento de las demandas del movimiento internacional de mujeres. Entre los años 90 y 2000, se aprueban una serie de instrumentos normativos de alcance internacional, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820, que abordaban, por primera vez, la necesidad de incorporar las mujeres a los postconflictos y a las negociaciones de paz, protegiendo su seguridad y considerando, en el caso de la segunda resolución, la violencia sexual en el marco del conflicto como daño específico de género. Si, evidentemente, el reconocimiento público de una situación de discriminación invisibilizada es un avance muy positivo, en la práctica, el contenido conceptual y normativo de estas dos resoluciones también tiene un efecto limitador, empezando por el hecho de que su contenido se circunscribe al marco de los conflictos armados, pero no contiene criterios o instrumentos fácilmente aplicables a la seguridad en contextos de conflicto social contra los cuerpos de las mujeres (Ellerby, 2015).

Asimismo, más allá de la securitización de la sociedad en su conjunto, los propios movimientos de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales y trans viven un debate en su seno sobre lo pertinente de que la respuesta a la inhabilitación de su vida, a la inseguridad que sufren como sujetos atravesados por el género, sea securitaria. Entendiendo la securitización según la propuesta de la Escuela de Copenhague, no sólo como la politización de un hecho, sino como delegación en el Estado de la obligación de responder a éste. Unos Estados, además, fuertemente masculinizados, que defienden los intereses de una élite política, económica, racial y de género concreta y que problematizan

cada vez más los derechos sexuales y de género. Que, adicionalmente, responden a los retos de seguridad de forma punitiva y, muy habitualmente, mediante políticas carcelarias, siendo las cárceles un instrumento con un sesgo de clase, género y raza concreto, que castiga con especial dureza ciertas poblaciones y que, lejos de hacer más seguras las vidas de las personas, puede contribuir a perpetuar desigualdad y violencia estructural –también de género– contra las personas presas.

No son pocas las teóricas feministas sobre Relaciones Internacionales que problematizan la acción de los Estados y cuestionan su estatus de "protector de las mujeres", por su implicación en el mantenimiento de las construcciones culturales y estereotipos que perpetúan las violencias de género y condenan a ciertos sujetos a un acceso inadecuado a la sanidad, al acoso sexual, a la impunidad, a la brecha salarial y de derechos, etc. En este sentido, las Teorías Feministas sobre Seguridad no niegan la posibilidad de obtener una protección limitada por parte del Estado o su obligación de proveerla (Blanchard, 2003), pero cuestionan la noción de "protección", considerándola "la obtención de obediencia/ subordinación a cambio de promesas de seguridad" (Peterson 1992, 50).

Siguiendo lo que Brian Job llama el "dilema de la inseguridad", es decir, el fortalecimiento de los mecanismos securitarios de los Estados –que luego pueden

ser aplicados contra determinados grupos e individuos en perjuicio de su seguridad– tiene riesgos (Job 1992: 18). En el contexto actual, una acción del Estado para proteger a un sujeto concreto, por ejemplo, a las mujeres blancas que sufren agresiones sexuales en la calle, puede terminar desprotegiendo a su vez o vulnerabilizando aún más a otros sujetos. La imagen distorsionada de que las violaciones y agresiones o feminicidios se dan masivamente a manos de extranjeros, por ejemplo, ha supuesto una fuerte reacción social y política contra los hombres refugiados y migrantes en países como Alemania, contribuyendo a alimentar el auge de una xenofobia que también impacta en términos de inseguridad sobre las mujeres de esas mismas comunidades. Lo mismo sucede con los sistemas de seguridad y detección de los aeropuertos, desplegados en nombre de la prevención contra el terrorismo y que facilitan las vulneraciones de derechos y las vejaciones a las personas transexuales y transgénero.⁷

Los riesgos de securitizar las amenazas de género pasan, también, por la promulgación de leyes que pueden volverse en contra de los sujetos a proteger, como las legislaciones antiterroristas o sobre discursos de odio, y apartarnos de objetivos como el de la transformación de la estructura social.

7. National Center for Transgender Equality, "Know your rights": <https://transequality.org/know-your-rights/airport-security>



4. METODOLOGÍA DE LOS ANÁLISIS DE CASOS

En este capítulo se realizan dos estudios de casos, partiendo de un análisis de los Estados Unidos de Trump y de la Europa de Salvini, Orban y el partido de la Ley y la Justicia en Polonia. Para poder relacionar los diferentes factores que, en el contexto actual en Occidente, pero especialmente en los territorios escogidos, estarían generando situaciones de inseguridad y vulnerabilización para las personas que los habitan, la observación de los casos parte de varias de las dimensiones de la seguridad humana, como la económica, la de salud, la personal o la comunitaria, adaptando estas a las **principales afectaciones a la seguridad en el caso de las mujeres y otras identidades sexuales y de género en Occidente**, aunque no aborda dimensiones como la medioambiental que son ya cruciales en términos de seguridad/ inseguridad internacional.

Se considera, también, el pionero **Índice de Mujeres, Paz y Seguridad** (Women, Peace, and Security Index) que el Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) y el PRIO (Peace Research Institute) presentaron en octubre de 2018, y que aborda la falta

de indicadores para monitorizar la igualdad de género en los análisis sobre conflictos, la fragilidad de los Estados, las crisis y las tensiones políticas.⁸ El WPS Index relaciona la propensión de un Estado a usar la violencia para resolver disputas internas o externas, con los niveles de violencia de género en el ámbito de la pareja y la pervivencia de normas sociales discriminatorias que justifiquen ataques a los derechos de las mujeres.

Para establecer una relación consistente y sólida entre la militarización y securitización actual, la ofensiva xenófoba y ultraconservadora y los impactos reales de género, en el informe se han considerado tanto los **elementos discursivos** que pueden avivar la discriminación y la violencia y contribuir a deshumanizar, como los **impactos materiales** –económicos y legislativos o normativos– sobre los cuerpos y vidas de las mujeres y las personas LGTBI. Los indicadores se han elaborado con una voluntad inclusiva, que abarque la interacción de las variables de identidad sexual y de género, clase social o estatus económico, ciudadanía/ situación irregular y componente racial, para reflejar todas las dimensiones que condicionan la experiencia de inseguridad y vulnerabilización de las personas.

8. The Women, Peace and Security Index: <https://giwps.georgetown.edu/the-index/>

4.1 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS E INDICADORES

Para contextualizar la relevancia y adecuación del país elegido para el análisis, cada caso se inicia con una introducción sobre la situación política, económica y de militarización en el país, así como de la presencia de discursos xenófobos y beligerantes contra los derechos de las mujeres y personas LGTBI por parte de los gobiernos respectivos. Teniendo en cuenta, sin embargo, las diferencias entre los países que se analizan, que coinciden en cuestiones como las reformas legislativas para normalizar la emergencia y en

el señalamiento y persecución de comunidades racializadas y migradas, pero que difieren en la ferocidad del discurso y los ataques materiales a los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. Especialmente, en el caso de Italia o de la extrema derecha de otros países como Francia, Suecia o Alemania, que presentan particularidades como la instrumentalización del discurso de la igualdad de género y de la liberación sexual al servicio de las políticas identitarias. Dos fenómenos llamados feminacionalismo y homonacionalismo que se desarrollan en el apartado dedicado al centro y sur de Europa.

Dimensiones y indicadores valorados en los casos prácticos

► DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA SEGURIDAD

Se considera, en este caso, la balanza y priorización entre el gasto destinado a defensa y seguridad y los recursos invertidos en el sostenimiento y protección de la vida y de la Seguridad Humana (gasto social). Se considera el peso del gasto militar y del social en el presupuesto público y en el PIB del país, los datos de empobrecimiento de la población y de la población femenina por origen y, allí donde existen, el empobrecimiento de otros colectivos e identidades sexuales y de género, así como otros indicadores como la tasa de población carcelaria.

Los datos se extraen de institutos y centros de referencia sobre gasto militar, militarización y defensa, tales como los informes del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y el Global Militarization Index, del Bonn International Center for Conversion (BICC), así como de la base de datos de desigualdades de la OCDE, las estadísticas de Eurostat y los principales documentos sobre priorización del gasto elaborados por campañas como la Campaña Global por la reducción del gasto militar (GCOMS).

► DIMENSIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL DE LA SEGURIDAD

Recoge los abusos sobre población migrada y racializada, la persecución normativa/legal, policial y militar o paramilitar hacia esta, los principales impactos de seguridad en las fronteras y en el interior del país, la protección a mujeres migradas y refugiadas víctimas de violencia de género y de tráfico de personas y el acceso de estas poblaciones y comunidades a la sanidad, educación o vivienda.

Los datos se extraen de los informes anuales de diferentes comisionados de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales y locales de defensa de los derechos fundamentales y humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la ACLU de Estados Unidos o la europea Fundamental Rights Agency (FRA), así como de las denuncias de las entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes.

► DIMENSIÓN PERSONAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FRENTE A LAS VIOLENCIAS

Se contemplan el impacto de la violencia física y las amenazas a la vida y a la integridad por motivos de género y opción sexual (feminicidio, agresiones sexuales y de carácter homóforo, lesbofobia y transfobia) y las denuncias por maltrato, así como la existencia de sistemas de protección contra estas violencias, su funcionamiento y los índices de impunidad de los perpetradores, sean estos actores estatales o no estatales.

Los datos se recogen de los informes de la Organización Mundial de la Salud, de las bases de datos estadísticos de Eurostat y de cada país, los informes de la FRA en Europa, los informes estatales al comité de la CEDAW (Convención de las Mujeres) y de los llamados "informes sombra" que realizan las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, así como de informes de otros colectivos.

► DIMENSIÓN DE SALUD DE LA SEGURIDAD

Se mide el acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en particular, considerando el acceso a la planificación familiar y las limitaciones y obstáculos legales y sociales al aborto, así como la securitización de las mujeres con VIH y el acceso de estas a tratamientos adecuados.

Los datos se extraen de los informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de las Naciones Unidas en la lucha contra el SIDA (UNAIDS), de los últimos informes publicados por Amnistía Internacional y de diferentes informes nacionales.



5. LAS DIMENSIONES DE LA INSEGURIDAD DE GÉNERO EN OCCIDENTE

5.1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, UN EJÉRCITO DE 40 MILLONES DE POBRES

Primera potencia económica, militar y tecnológica mundial, en los Estados Unidos viven cuarenta millones de pobres, casi la mitad de estos (18,5 millones) en situación de pobreza extrema, uno de cada 8 de sus 326 millones de habitantes.⁹ Con un PIB de casi 19,39 billones de dólares en 2017, EEUU es el tercer país con mayor brecha de pobreza –diferencia entre el umbral de pobreza y la mediana de los ingresos de las personas que se encuentran por debajo de este umbral– de la OCDE, después de Suráfrica e Italia, y el séptimo con mayor desigualdad entre rentas.¹⁰ La llegada del multimillonario Donald Trump a la presidencia del país en 2016, apelando al retorno a una "América fuerte" y en defensa del "American way of

life", blandiendo la bandera del nacionalismo aislacionista y acusando a la libre circulación de mercancías y personas de haber agudizado el desempleo y de haber hecho perder poder adquisitivo a la clase trabajadora blanca,¹¹ fue sólo el preámbulo de una estrategia abiertamente securitizadora y militarista que, entre otros, ha llevado a aprobar unos presupuestos en defensa para 2019 que ya son considerados por el Washington Post como los más elevados de la historia norteamericana reciente, más que en el pico más alto de gasto de la guerra de Vietnam.

El aumento del gasto militar forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 por la administración Trump, que se guía "por un retorno al realismo" y que aboga por "aumentar la influencia norteamericana, preservar la paz a través de la fuerza, promover la prosperidad económica y defender internamente el país, el pueblo estadounidense y la forma de vida americana",¹² asociando estos inputs al

9. Declaración sobre la visita a los Estados Unidos del relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los Derechos Humanos, 15/12/2017: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=5>

10. Base de datos OCDE desigualdad: <https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm#indicator-chart>

11. Público, blog Crónicas Insumisas, "El neoliberalismo y belicismo de Donald Trump". Tica Font y Pere Ortega, 14/06/2017: <https://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2017/06/14/el-neoliberalismo-y-belicismo-de-donald-trump/>

12. National Security Strategy of the United States of America, 2017: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>

establecimiento de aranceles comerciales a la importación, la seguridad nacional-militar, la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y la facilitación de las deportaciones de personas migradas.

El documento estratégico también hace mención a la necesidad de "promover esfuerzos para avanzar en la igualdad de las mujeres, en la protección de sus derechos y en la promoción de su apoderamiento".

La traducción de esta apuesta se ha reflejado, en estos dos primeros años de mandato, en declaraciones sobre la violencia de género y sexual de un talante misógino ciertamente desacomplejado, la retirada de las ayudas internacionales a organizaciones que trabajan por el acceso de las mujeres a un aborto seguro, el recorte de las políticas de protección contra la violencia sexual en las universidades, la suspensión de iniciativas de promoción de la igualdad salarial, en políticas contra la autonomía corporal y reproductiva de las mujeres y en una obsesión con los derechos de las personas transexuales e intersexuales que ponen a estos sujetos, históricamente muy vulnerabilizados, en una situación de mayor inseguridad.

En lo estructural, hay que mencionar también los impactos de género derivados de una apuesta clara por el militarismo como modelo de gestión de los conflictos políticos y sociales, y una mayor feminización de la pobreza como consecuencia de los recortes en el gasto social aprobados para el año fiscal 2019.

Dimensión económica de la inseguridad y sostenibilidad de la vida

Gasto militar y de defensa

Los Estados Unidos son, según el Global Militarization Index de 2017,¹³ el segundo país más militarizado del continente americano y el que dedica más parte del presupuesto al gasto militar, seguido de China y de Rusia, siendo éste un 39% del gasto militar global. Después de decrecer desde 2011, año en que culmina la retirada de tropas estadounidenses de Irak, el gasto militar volvió a aumentar en 2017 a 610 billones de dólares, según datos del SIPRI.¹⁴ Para 2019, el senado de Estados Unidos aprobaba en junio de 2018 un presupuesto de 717 billones de dólares, a pesar de las advertencias de economistas y legisladores de que este gesto agravará de forma preocupante el déficit federal y podría disparar la inflación. Trump ha expresado su intención de continuar con la expansión

militar norteamericana, ampliando el ejército del país con unos 120.000 nuevos soldados, que se añadirían al contingente del 1.300.000 que tiene en activo, más las 800.000 personas que están en la reserva.¹⁵ La ampliación de las tropas es, junto con la modernización del equipamiento militar –que ya comenzó Barack Obama– y el desarrollo de nuevo armamento, incluyendo nuevo armamento nuclear, la apuesta de Trump para hacer el ejército de EE.UU. "más fuerte de lo que lo ha sido nunca."¹⁶

El Congreso acordó, también, aumentar significativamente los fondos del Pentágono. La propuesta de presupuesto aprobado acordaba financiar el resto de organismos encargados de la seguridad nacional con 51.000 millones de dólares, mientras que el gasto militar y de seguridad real, sumando las pensiones de los veteranos de guerra, los intereses de deudas, el presupuesto federal y otras partidas, ascendería a 1,135 billones de dólares, según datos del Centro para la Información de Defensa, que forma parte del Project On Government Oversight (POGO), una organización independiente estadounidense que investiga y monitoriza la corrupción y el despilfarro de recursos públicos. "Si la administración Trump saca adelante sus planes en el ámbito de la defensa y los valores del PIB no aumentan de forma proporcional –reza el Global Militarization Index del 2017– el resultado más probable es un aumento de la militarización de los Estados Unidos".

Gasto social

Mientras el país envía al mundo la señal de estar preparándose para la guerra, Trump ha iniciado un "cambio dramático de dirección en las políticas relativas a la desigualdad y a la pobreza extrema",¹⁷ a pesar de que presentó los presupuestos para el año fiscal 2019 como pilares de "la seguridad del pueblo estadounidense y de una mayor calidad de vida para los estadounidenses que trabajan duro". Según el Center on Budget and Policy Priorities, un instituto de investigación que trabaja para la reducción de las desigualdades y la pobreza, millones de personas podrían perder la cobertura sanitaria por los recortes del llamado Medicaid, un sistema con financiación nacional y federal que sufraga parte de los costes médicos a personas con bajos ingresos o pocos recursos, en uno de los países de la OCDE con mayores ratios de mortalidad infantil, pobreza juvenil y obesidad.

13. Bonn International Center for Conversion, "Global Military Index 2017": <https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/global-militarization-index-2017-785/>

14. Base de datos del SIPRI: <https://www.sipri.org/databases/milex>

15. Base de datos del Banco Mundial: <https://data.worldbank.org/>

16. CNN, "What the massive US military budget pays for", 28/03/2018: <https://edition.cnn.com/2018/03/28/politics/us-military-spending-items-intl/index.html>

17. Declaración sobre la visita a los Estados Unidos del relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los Derechos Humanos, 15/12/2017: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=5>

El centro alerta, también, de un recorte del 30% en 10 años de los recursos destinados al programa SNAP, de ayuda a la alimentación, que afectará especialmente a las personas que están en paro, las personas mayores y las familias de clase trabajadora con pocos recursos,¹⁸ así como de las ayudas públicas a la educación, acceso a la vivienda y suministros energéticos, considerando que Estados Unidos es uno de los países de la OCDE con una mayor brecha de desigualdad entre ricos y pobres y que las ayudas públicas recortadas mantuvieron a 44 millones de personas fuera del umbral de la pobreza en 2017, haciendo que esta descendiera ligeramente respecto al 2016.¹⁹ Para el relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, "el paquete de reforma fiscal puede llevar a los Estados Unidos a convertirse en la sociedad más desigual del mundo y aumentará enormemente los niveles, ya altísimos, de desigualdad en la distribución de la riqueza y de los ingresos entre el 1% más rico y el 50% más pobre de los estadounidenses".

En cuanto a la financiación de la ayuda exterior, considerando los impactos para las mujeres de otros países, especialmente en lo que se refiere a financiación de la salud sexual y reproductiva, la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres (International Women's Health Coalition) califica el presupuesto de la administración Trump de "guerra global contra los derechos de las mujeres",²⁰ considerando la reducción del 32% en la partida destinada a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y proponiendo la eliminación de la contribución de Estados Unidos a la agencia de las Naciones Unidas para las mujeres (UN Women), el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) y la agencia de protección de la infancia, UNICEF.

¿Cómo afectarán los recortes en inversión social a las mujeres y a las personas LGBTI?

Los recortes a las ayudas públicas previstos empeorarán la situación de los 16 millones de mujeres y de los 12,8 millones de niños que viven bajo el umbral de la pobreza en Estados Unidos²¹ y, especialmente, de las afroamericanas y latinas, profundizando aún más las desigualdades económicas que sufren, especialmente teniendo en cuenta que el 42% de las madres

norteamericanas son madres solas o ganan el salario principal en sus hogares,²² cifra que aumenta hasta el 70% en el caso de las madres afroamericanas. En conjunto, las mujeres en Estados Unidos tienen un 38% más de probabilidades de vivir en situación de pobreza que los hombres, especialmente las mujeres racializadas y migradas. Así, 1 de cada 10 mujeres blancas vivían por debajo del umbral de la pobreza en el año 2017, en comparación con el 7% de los hombres del mismo colectivo. Las cifras se duplican para las mujeres afroamericanas y nativas americanas, el 21% y el 20% de las cuales, respectivamente, son pobres, como lo es el 18% de las mujeres latinas. En cuanto a las mujeres migradas, una de cada seis vivía en situación de pobreza en 2017.

■ Parte de esta tasa mayor de empobrecimiento es causado por la **brecha salarial**, que hace que por cada dólar que gana un hombre blanco en Estados Unidos, una mujer blanca gane 80 céntimos, las afroamericanas ganen 63 de media y las latinas 54 céntimos,²³ según un informe del National Women's Law Center. Asimismo, esta desigualdad en la percepción de salarios genera discriminaciones en el acceso a la salud y a las pensiones, factor que ayuda a explicar el hecho de que 2/3 de las personas mayores en situación de pobreza –uno de los colectivos más beneficiados por el programa SNAP– sean mujeres, así como que estas representen 2/3 de las usuarias (40 millones) del programa Medicaid, uno de los que sufrirá mayores recortes. Es importante destacar, en este sentido, que la administración Trump ha suspendido iniciativas de promoción de la igualdad salarial encaminadas a revertir esta situación de discriminación.²⁴

En cuanto a las personas LGTBI, la Asociación Americana de Psicología (APA) asegura que las evidencias indican que las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y/o trans, aproximadamente el 4,5% de la población de los Estados Unidos, son **más vulnerables a la pobreza** y experimentan una desventaja económica mayor que las parejas heterosexuales, lo que afecta decisivamente a su bienestar y seguridad. Concretamente, las personas LGTBI de clase obrera o con ingresos bajos son con más frecuencia usuarios del programa SNAP y de otros programas de protección social. Además, el 29% de las mujeres bisexuales y el 23% de las lesbianas de entre

18. Center on Budget and Policy Priorities, "The 2019 Trump Budget: Hurts Struggling Families, Shortchanges National Needs", 21/02/2018: <https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/2-20-18pb19factsheet.pdf>

19. US Census Bureau, "Income and Poverty in the United States: 2017", Setiembre 2018: <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2018/demo/p60-263.pdf>

20. IWHC, "Trump's War on Women, to be Continued in 2018", 13/02/2018: <https://iwhc.org/2018/02/trumps-war-on-women-continues/>

21. National Women's Law Center, "National Snapshot: Poverty Among Women & Families, 2018": <https://nwlc.org/resources/national-snapshot-poverty-among-women-families-2018/>

22. Center for American Progress, "Breadwinning Mothers Are Increasingly the U.S. Norm", 19/12/2016: <https://www.americanprogress.org/issues/women/reports/2016/12/19/295203/breadwinning-mothers-are-increasingly-the-u-s-norm/>

23. National Women's Law Center, "The Wage Gap: The Who, How, Why, and What To Do", 19/10/2018: <https://nwlc.org/resources/the-wage-gap-the-who-how-why-and-what-to-do/>

24. CNN, "Ivanka Trump supports ending Obama-era equal pay data collection rule", 1/09/2017: <https://edition.cnn.com/2017/08/31/politics/white-house-ivanka-trump-equal-pay-data/index.html>



18 y 44 años viven bajo el umbral de la pobreza, así como el 20% de los gays y el 25% de los hombres bisexuales, en comparación con el 15% de los hombres heterosexuales pobres que habitan en Estados Unidos.²⁵ La pobreza incide especialmente en los 3 millones de gays, lesbianas, bisexuales y trans e intersexuales que se reconocen como afroamericanos o racializados.²⁶ Una de las causas principales de la precariedad económica de las personas LGTBI en Estados Unidos es la discriminación en el ámbito laboral, que se dispara en el caso de las personas trans. El 90% de las personas transexuales y transgénero que participaron de la Encuesta Nacional sobre Discriminación hacia las personas trans en el año 2012, aseguraban haber sufrido acoso, maltrato o discriminación en su lugar de trabajo por su identidad de género.²⁷

Dimensión social y comunitaria de la inseguridad

En la mencionada Estrategia de Seguridad Nacional, la protección del pueblo americano, del país y del

modo de vida americano se asocia directamente con la militarización (el "fortalecimiento", literalmente) de las fronteras y la reforma del sistema migratorio. La política antinmigración de Trump y, especialmente, la política de deportaciones de inmigrantes y la separación de más de 6.000 familias, se ha convertido en una de las acciones más polémicas del mandato del empresario, levantando críticas de la comunidad internacional y de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, sobre todo después de que trascendieran imágenes de las condiciones inadecuadas y crueles en que se mantenía a menores de edad, a menudo niños, en centros de internamiento, vulnerando sus derechos y exponiéndolos a potenciales maltratos y abusos.²⁸

Las medidas adoptadas incluyen:

- Órdenes ejecutivas de prohibición de entrada en Estados Unidos de musulmanes y musulmanas de determinados países.
- El aumento de las detenciones de personas solicitantes de asilo y de sus familias.
- La suspensión durante 20 días del programa de reasentamiento de refugiados y el despliegue de

25. American Psychological Association, "Sexual orientation, gender identity and socioeconomic status": <https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/factsheet-lgbt.pdf>

26. Movement Advancement Project, "Paying an Unfair Price: The Financial Penalty for LGBT People of Color in America", Abril 2015: <http://www.lgbtmap.org/unfair-price-lgbt-people-of-color>

27. National Center for Transgender Equality, "National Transgender Discrimination Survey: Full Report", 11/09/2012: <https://transequality.org/issues/resources/national-transgender-discrimination-survey-full-report>

28. Comunicado de Amnistía Internacional, "Estados Unidos: La separación sistemática de familias solicitantes de asilo es una violación del derecho internacional", mayo 2018: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/estados-unidos-la-separacion-sistemática-de-familias-solicitantes-de-asilo-es-una-violación-del/>

5.000 agentes adicionales de las Patrullas Fronterizas en la frontera entre Estados Unidos y México

- La propuesta de construir un muro que separe ambos países

Organizaciones activas en la defensa de los derechos fundamentales, como el Women's Media Center y el Center for American Progress, califican las políticas migratorias de Trump de "devastadoras para las mujeres y las personas LGTBI deportadas",²⁹ muchas de las cuales originarias de países con altísima incidencia de feminicidios y violencia de género y sexual y de impunidad para con sus perpetradores, como México, El Salvador, Honduras o Guatemala.

Los cambios en la legislación y las políticas de asilo, que entre otros consideran la violencia de género como "privada", ponen, al mismo tiempo, más obstáculos para las solicitantes de asilo que huyen de casos graves de violencia de género pública y privada, de persecución por identidad de género u opción sexual o de la acción de bandas criminales organizadas. Y el peligro permanente de deportación lleva a las mujeres y las personas LGTBI a soportar sin denunciar abusos y vulneraciones, en una situación de silencio y desprotección creciente,³⁰ después de soportar un viaje desde México en el que al menos 6 de cada 10 mujeres son violadas, según datos de Amnistía Internacional.

Internamente, la política de continuidad en la militarización de la policía y en el encarcelamiento masivo, que no son obra de la administración Trump pero sí una tendencia que, no sólo no se revierte, sino que se expande con el presidente actual,³¹ continúa golpeando con especial dureza a la población negra y afroamericana y a la población latina. Por un lado, varios informes señalan que, entre 1997 y 2014, el Departamento de Defensa transfirió 4.300 millones de dólares en equipamiento militar a los cuerpos policiales, entre otros carros blindados, armamento y aviación, sin que se haya demostrado que este proceso de militarización haya contribuido a reducir el crimen o la inseguridad.³² Estas políticas de militarización entroncan con lo que Fanna Gama llama "políticas raciales de protección", debido a que con-

tribuyen a reforzar las jerarquías raciales en Estados Unidos (Gama, 2016).

Por otra parte, Estados Unidos es el primer país en número de presos, con 2,3 millones de reos, un 25% de la población presidiaria mundial. De entre estos, la población afroamericana y latina tiene entre 5 y 10 veces más probabilidades de terminar encarcelada, lo que significa que uno de cada tres chicos negros y uno de cada seis chicos latinos pisarán una cárcel estadounidense en algún momento durante su vida, comparados con uno de cada 17 chicos blancos. Asimismo, las mujeres son la población presidiaria que más rápidamente crece en la actualidad, como indica un informe realizado conjuntamente por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y la Prison Policy Initiative y publicado a finales de 2017, que también aporta datos que ayudan a explicar el fenómeno, como que el 60% de estas mujeres se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio,³³ y que esto entronca con las fianzas cada vez más elevadas que los jueces exigen para la excarcelación y con el progresivo empobrecimiento de las mujeres.

También la población LGTBI norteamericana sufre una tasa de encarcelamiento desproporcionada. Uno de los colectivos más afectados por las políticas de Trump en este sentido es, de hecho, la población presa transexual y transgénero, que constituye el 16% de la población total de este colectivo, y que están en prisión, mayoritariamente, por delitos relacionados con la migración, el sinhogarismo y la pobreza, con la victimización que supone pasar por una institución marcadamente transfóbica como es la penal, donde casi el 60% de las personas trans sufren abusos sexuales y agresiones a manos de otros reos o de los funcionarios de prisiones.³⁴ Si con Obama, la consigna era encarcelar a la población trans en función de su identidad de género elegida, la administración Trump anunció en mayo un cambio de política, recomendando el uso del sexo biológico como rasgo determinante para designar si se les envía a una prisión de hombres o de mujeres.³⁵

La militarización y securitización de los Estados Unidos con la administración Trump se traslada a la dimensión comunitaria y social de la seguridad, no sólo a través del discurso que vincula la seguridad nacional con la militarización de la policía y de la frontera con México, o con la deportación de personas, tam-

29. Center for American Progress, "Women and LGBTQ Deportees Face Compounded Dangers Upon Return", 10/08/2018: <https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2018/08/10/454637/women-lgbtq-deportees-face-compounded-dangers-upon-return/>

30. Time, "Deportation Fears Silence Some Domestic Violence Victims", 30/05/2017: <http://time.com/4798422/domestic-violence-deportation-immigration/>

31. Charles Koch Institute, "Militarization of Police": <https://www.charleskochinstitute.org/issue-areas/criminal-justice-policing-reform/militarization-of-police/>

32. Revista de la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU., "Militarization fails to enhance police safety or reduce crime but may harm police reputation", 24/03/2018: <http://www.pnas.org/content/115/37/9181>

33. ACLU i PPI, informe "Women's Mass Incarceration: The Whole Pie 2017", octubre 2017: <https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2017women.html>

34. The Century Foundation, "Eight Things You Should Know About Trump's Reversal of Transgender Prison Rights", 13/05/2018: <https://tcf.org/content/commentary/eight-things-know-trumps-reversal-transgender-prison-rights/?agreed=1>

35. Oficina Federal de Prisiones, "Transgender offender manual", 11/05/2018: <https://www.documentcloud.org/documents/4459297-BOP-Change-Order-Transgender-Offender-Manual-5.html>

bién a través de la tibieza con el creciente extremismo blanco que, entre otros impactos de género, provocó la muerte de la activista por los derechos civiles Heather Heyer, en Charlottesville (Virginia), en agosto de 2017. Un informe de la Liga Antidifamación (ADL) publicado recientemente muestra que el 71% de los ataques extremistas con víctimas desde el 2008 al 2017 en Estados Unidos fueron cometidos por hombres vinculados a la extrema derecha o a los movimientos supremacistas blancos, dejando 274 víctimas mortales, mientras que el extremismo islámico fue responsable del 26% de los ataques en el mismo periodo.³⁶ La inacción para con esta amenaza, que pone en su punto de mira la población que pertenece a minorías raciales, a la población judía y las personas LGTBI, entronca con la profunda discriminación estructural de la población migrada y de las –todavía– minorías raciales de Estados Unidos, y aumenta su inseguridad a todos los niveles.

Ligado al supremacismo blanco, aparece en Estados Unidos, pero también en Canadá, el fenómeno de los 'Incels', que salen a la luz a raíz de ataques como el que acabó con la vida de 10 personas en Toronto en abril de 2018, bajo la noción de que el feminismo ha arruinado la sociedad, obligando a muchos hombres a quedarse solteros, y llamando a la revuelta de la masculinidad hegemónica y blanca.

En el ámbito político y social, todas estas acciones parecen determinadas a detener una tendencia que parece bastante irreversible: la población blanca en Estados Unidos será, en 25 años, una minoría racial más en un país de minorías raciales, de acuerdo con el censo de Proyecciones de Población Nacional de 2017.³⁷ Como hemos visto a lo largo del informe, el miedo a la pérdida de privilegios raciales y de género en todos los ámbitos del poder, podría ser con mucha probabilidad un elemento que desencadene más violencia e inseguridad para con la población migrada y no blanca en Estados Unidos.

Dimensión personal y física de la inseguridad

Hay algunos elementos clave a la hora de analizar cómo operan la violencia, la inseguridad física y el riesgo para la vida y la integridad de mujeres y personas LGTBI en Estados Unidos, y la respuesta a esta bajo la administración Trump. Se calcula que:

- **Una de cada cuatro** mujeres ha sido, es o será víctima de violencia de género en Estados Unidos, se-

36. ADL, informe "Murder and Extremism in the United States in 2017", Enero 2018: <https://www.adl.org/resources/reports/murder-and-extremism-in-the-united-states-in-2017#key-findings>

37. Datos de la 2017 National Population Projections Tables: <https://www.census.gov/data/tables/2017/demo/popproj/2017-summary-tables.html>

gún las estadísticas de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica de EE.UU. (NCADV).³⁸

- **Más de 23 millones de mujeres** (un 19% de las estadounidenses) han sufrido una violación y una de cada tres mujeres, un intento de violación, el 80% de ellas a manos de familiares, parejas, amigos o conocidos, según la encuesta más completa que se ha hecho en el país,³⁹ realizada entre 2010 y 2012 por el Centro Nacional de Prevención y Control de la Violencia (National Center for Injury Prevention and Control). Si la violencia sexual tiene una incidencia similar entre mujeres blancas, afroamericanas, latinas y asiáticas, los porcentajes se disparan en el caso de las nativas americanas y las mujeres de los pueblos indígenas en Alaska, la mitad de las cuales (un 45,6%) experimentan agresiones sexuales a lo largo de su vida.

- Se calcula que cada día **mueren entre dos y tres mujeres** en Estados Unidos a manos de sus parejas o exparejas y que, de las 3.519 mujeres y niñas que fueron asesinadas en el 2015 en el país, al menos la mitad fueron feminicidios íntimos, es decir, cometidos por las parejas o ex parejas.⁴⁰ La tasa más alta de feminicidio prevalece entre las mujeres y niñas afroamericanas y las nativas americanas.⁴¹

La proliferación de armas pequeñas al alcance de todo el mundo, uno de los grandes debates abiertos actualmente en la sociedad norteamericana, a raíz de varias masacres recientes en institutos de secundaria y universidades, también tiene su papel en la violencia de género, hasta el punto de que las estadísticas muestran que en el 19% de las situaciones de violencia doméstica hay un arma de por medio, al tiempo que la presencia de una pistola o arma **aumenta el riesgo de feminicidio en un 500%**.⁴²

A pesar de que el presidente Trump ha declarado públicamente estar preocupado por la violencia doméstica, y ha asegurado que los presupuestos aprobados para el año fiscal 2019 supondrán una inversión en prevención y una inyección de fondos para la Ley sobre Violencia contra las Mujeres (VAWA), la Coalición

38. Estadísticas de la National Coalition Against Domestic Violence (NCADV): <https://ncadv.org/statistics>

39. NISVS, The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010–2012 State Report: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf>

40. Journal of the American Anthropological Association, "Gender-Based Violence in the US", 3/4/2018 <http://www.americananthropologist.org/2018/04/03/gender-based-violence-in-the-us/>

41. Centers for Disease control and prevention, "Racial and Ethnic Differences in Homicides of Adult Women and the Role of Intimate Partner Violence — United States, 2003–2014", 21/07/2017: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6628a1.htm?s_cid=mm6628a1_wHomicide

42. American Journal of Public Health, "Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study", Juliol 2003: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447915/>

Nacional contra la Violencia Doméstica (National Coalition Against Domestic Violence) ha denunciado que las víctimas y supervivientes de la violencia machista se verán fuertemente perjudicadas⁴³ por los recortes de programas y servicios clave, tales como el asesoramiento y acompañamiento legal gratuito o subvencionado a víctimas, y por la desviación de estos fondos a otras partidas.

La percepción de que los derechos de las mujeres y los derechos sexuales están en riesgo ha generado una fuerte movilización social y electoral de las mujeres contra las políticas del actual presidente, con marchas masivas en la calle o campañas como #MeToo, con la que miles de mujeres se atrevieron a hacer públicas las agresiones que habían sufrido y a señalar a sus agresores, incluidas figuras prominentes, como el recientemente nombrado juez del Tribunal Supremo estadounidense Brett Kavanaugh. La reacción de Trump al #MeToo y a la denuncia pública de las agresiones –que lo ha salpicado personalmente– ha sido afirmar que "es un momento terrorífico para los hombres en Estados Unidos, en el que te pueden acusar de algo de lo que no eres culpable".⁴⁴

Especial eco ha tenido la polémica reacción del gobierno Trump con respecto al abordaje de la altísima incidencia de las violaciones, agresiones sexuales y acoso dentro de los campus universitarios, que se calcula que afectan al 20-25% de las estudiantes y al 15% de los estudiantes hombres. Si, bajo el gobierno Obama, se habían promovido medidas de prevención y protección del alumnado, la administración Trump rescindió estos protocolos, expresando la preocupación en torno a los derechos de los estudiantes hombres y su presunción de inocencia.⁴⁵

La violencia contra las personas LGBTI: trans e intersexuales en el punto de mira de Trump

Si el actual gobierno estadounidense tiene alguna fijación son, sin duda, los derechos de las personas transsexuales e intersexuales que, según organizaciones como la histórica National Organization for Women (NOW), están bajo lo que tildan de "ataque sistemático". En medio de un contexto de violencia contra personas trans que terminó con 29 personas muertas en 2017, en algunos de los casos con un trasfondo de odio de género claro, en otros, facilitada por el riesgo

que enfrenta este colectivo en Estados Unidos, como por ejemplo una tasa mayor de sinhogarismo.⁴⁶ Si los activistas afirman que el aumento de homicidios de personas transexuales es alarmante, la suspicacia aumenta si se atiende a la variable racial. De las 102 transexuales y transgénero asesinadas entre 2013 y 2017, el 86% de las víctimas eran negras, latinas o nativas americanas.⁴⁷

De los aproximadamente 300.000 ataques y agresiones homófobas, lesbófobas y transfobas que se calcula que tuvieron lugar entre 2012 y 2016,⁴⁸ sólo un pequeño porcentaje son denunciados y perseguidos, en parte por la desconfianza histórica y crónica que la comunidad LGBTI profesa a la policía, que, en muy diversas ocasiones, empezando por los hechos de Stonewall que impulsaron la lucha por la liberación sexual, ha liderado o participado en ataques de este tipo.

Pero más allá de las agresiones, la discriminación cotidiana y la violencia institucional creciente hacia las personas trans e intersexuales bajo la administración Trump toma formas muy diversas, en un retroceso claro respecto al gobierno anterior, en el que se impulsó un reconocimiento público y social de estas identidades en ámbitos como el político o el educativo, introduciendo protocolos –ahora derogados– para reconocer a los alumnos según su identidad de género, con independencia del sexo de sus documentos. El actual presidente pretende, además, cambiar el lenguaje de la ley federal de derechos civiles, que reconocía la posibilidad de que una persona fuera transgénero o intersexual, por una definición del sexo como "el estatus de una persona como hombre o mujer, a partir de rasgos biológicos inmutables identificados al momento de nacer o antes"⁴⁹. Y, al parecer, la cruzada de Trump para eliminar el género sólo acaba de empezar.

Dimensión de salud sexual y reproductiva

Si, mayoritariamente, serán las mujeres quienes asuman los recortes del gobierno Trump al presupuesto de Medicaid, a costa de su acceso a la sanidad, uno de los ámbitos en que esta desinversión tendrá más impacto es la salud reproductiva, ya que se calcula

43. NCAADV, "NCAADV Denounces President Trump's FY'19 Budget Request", 20/02/2018: <https://ncadv.org/blog/posts/ncadv-denounces-president-trumps-fy19-budget-request>

44. NBC News, "Trump: It's a very scary time for young men in America", 2/10/2018: <https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-it-s-very-scary-time-young-men-america-n915906>

45. Politico.com, "Obama-era school sexual assault policy rescinded", 22/09/2017: <https://www.politico.com/story/2017/09/22/obama-era-school-sexual-assault-policy-rescinded-243016>

46. Human Rights Campaign, "Violence Against the Transgender Community in 2018" <https://www.hrc.org/resources/violence-against-the-transgender-community-in-2018>

47. Transrespect, "The vicious circle of violence: Trans and gender-diverse people, migration, and sex work", Octubre 2017: <https://transrespect.org/wp-content/uploads/2018/01/TvT-PS-Vol16-2017.pdf>

48. The Center for Public Integrity, Lack of trust in law enforcement hinders reporting of LBGQT crimes, 24/08/2018: <https://www.publicintegrity.org/2018/08/24/22138/lack-trust-law-enforcement-hinders-reporting-lbgqt-crimes>

49. New Yorker, "The trauma of the Trump administration's attacks on transgender people", 22/10/2018: <https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-trauma-of-the-trump-administrations-attacks-on-transgender-people>

que Medicaid cubre casi la mitad de los nacimientos en el país y el 75% de los servicios de planificación familiar.⁵⁰

La situación se agrava por el hecho de que ya son los segundos presupuestos que desinvierten en control y autonomía de las mujeres sobre el propio cuerpo. En el presupuesto de 2018, que fue calificado por organizaciones y ONG que trabajan en salud sexual y reproductiva de "guerra global contra los derechos de las mujeres", se proponía la completa eliminación de la financiación de la salud reproductiva y la planificación familiar, en el país y en la ayuda exterior, en una clara maniobra para restringir hasta el extremo el acceso al aborto, especialmente de las mujeres de clase trabajadora y con una situación económica más precaria. Entre otras cosas, porque deja sin ingresos al principal servicio que practica interrupciones voluntarias del embarazo, Planned Parenthood.⁵¹

Otro de los factores que dificulta el acceso a la sanidad es la criminalización y persecución de las mujeres que realizan ciertas actividades –legales o ilegales– estando embarazadas. Esto entronca con la epidemia de consumo de opiáceos, que afecta gravemente a las capas más empobrecidas de la población estadounidense. Cientos de mujeres con problemas de consumo de drogas y alcohol han sido detenidas en los últimos años en Estados Unidos bajo delitos conocidos como "agresión fetal", lo que traspasa todos los límites del paternalismo y de la intromisión del Estado en el cuerpo de las mujeres. La persecución penal de las madres embarazadas con consumo, y el hecho de que los centros de salud sean quienes dan el aviso, hasta el punto de realizar, en algunos estados, análisis de drogas sin consentimiento, propicia que estas mujeres eviten los centros médicos, con las consecuencias que esto puede acarrear para su salud.⁵²

5.2 INSEGURIDAD DE GÉNERO EN LA FORTALEZA EUROPEA

El continente europeo, especialmente los países que forman parte de la Unión Europea, que nació sobre los valores –en teoría– de la justicia, la equidad y la no discriminación, se encuentra inmerso en un ingente proceso de militarización interna y de fronteras. La estrategia de seguridad europea contempla, para la lucha contra el terrorismo, medidas de normalización

y de institucionalización de técnicas biométricas y de vigilancia masiva, especialmente hacia las personas que intentan penetrar en el espacio Schengen y ciertas comunidades señaladas como cuna del yihadismo, pero que impactan sobre toda la ciudadanía de la Unión. En un informe publicado en enero de 2017, Amnistía Internacional avisaba del riesgo de convertir en permanente la promulgación de medidas de excepcionalidad legal y política en países como Francia, después de atentados masivos reivindicados por el Estado Islámico, y del peligro de derogar de facto derechos y libertades con motivo "de la amenaza a los valores y fundamentos"⁵³ que representa el fenómeno del terrorismo.

Desde 2014, la profunda securitización de Europa y de sus fronteras ha entroncado con el surgimiento y auge de partidos de ultraderecha, que ya gobiernan –solos o en coalición– en Austria, Bélgica, Italia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Hungría y Polonia. Aunque los programas que defienden no coinciden en su totalidad, hay tres puntos que permiten visualizar una estrategia común: el militarismo y el aumento del gasto en defensa y seguridad, la obsesión por frenar la llegada de migración africana y de Oriente Medio y la voluntad de recortar derechos a las mujeres y las personas LGTBI, enmarcada en la defensa de la familia tradicional, "creada entre un hombre y una mujer", en palabras de Matteo Salvini, ministro de Interior y viceprimer ministro italiano. Salvini es una de las caras más visibles de lo que Sara Garbagnoli, socióloga feminista italiana, considera una "contrarrevolución racista, machista y homófoba",⁵⁴ que se opone públicamente a la "ideología de género promovida por los lobbies feminista y homosexual que colonizan el mundo".

Esta ofensiva patriarcal para naturalizar de nuevo la diferencia sexual y la discriminación por motivos de género, identidad y opción sexual, de la que también participan con ahínco el gobierno de Polonia, el de Viktor Orban en Hungría, el FPÖ en Austria, el Frente Nacional en Francia y el actual Partido Popular en España, liderado por el ultraconservador Pablo Casado, tiene traducciones materiales en forma de retrocesos y de amenaza sobre el derecho al aborto y el acceso a anticonceptivos, de demonización de la Convención de Estambul contra las violencias, que es vista como un caballo de Troya para destruir a la familia, de eliminación de la educación sexual, y de inacción y promoción de políticas que revictimizan a las mujeres y a las

50. Campaigna Health care for America now, "Fact Sheet: Women Pay the Price for Cuts in President Trump's 2019 Budget: http://healthcareforamericanow.org/resources/factsheets/fact-sheet-women-pay-price-cuts-president-trumps-2019-budget#_edn2

51. Quartz, "What Trump's new abortion rule could mean for women's health", 2018: <https://qz.com/1282288/what-trumps-new-abortion-rule-could-mean-for-womens-health/>

52. Amnistía Internacional, Políticas del cuerpo: manual general sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción, 2018: <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4077632018SPANISH.PDF>

53. Amnistía Internacional, "Dangerously Disproportionate: The Ever-expanding national security state in Europe", gener 2017: <https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/5342/2017/en/>

54. Open Democracy, "Matteo Salvini, renaturalizing the racial and sexual boundaries of democracy", 1/10/2018: <https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/sara-garbagnoli/matteo-salvini-renaturalizing-racial-and-sexual-boundaries-of-dem>



personas LGBTI en las fronteras, exponiéndolas a una incidencia mayor de abusos y agresiones sexuales.

Sin embargo, a pesar de los impactos que están contribuyendo a generar los discursos y políticas de estos nuevos líderes de la geopolítica neorrealista en Occidente, es interesante observar la relación compleja, interesada y contradictoria que hacen de la igualdad de género, que no deja de ser concebida como un valor occidental. Aunque abanderan el combate a la "ideología de género" y del retorno a la familia tradicional como ente natural, la derecha y la extrema derecha populista europea se sirven a menudo del discurso de la protección de las mujeres blancas europeas frente a la violencia sexual perpetrada por migrantes y refugiados, perpetuando el estereotipo de que son otros hombres quienes "violan a nuestras mujeres". Salvini, en Italia, Xavier García Albiol en Cataluña, el partido ultraderechista AFD en Alemania o Marine Le Pen en Francia han aprovechado agresiones en sus países para hacer bandera de este discurso, que pone la defensa de las mujeres al servicio de una política antimigración muy restrictiva,⁵⁵ que Sarah R. Farris llama "feminacionalismo" (femonationalism), y que consiste en invocar la igualdad de género desde una retórica xenófoba (Farris, 2017: 6) y defensora de la identidad

blanca. En casos como el de España, sin embargo, los datos reflejan de forma clara que la mayoría de los agresores son nacionales del país y en el caso de los feminicidas de los últimos 5 años, por ejemplo, entre el 60,5% y el 73,3% eran de nacionalidad española.⁵⁶

Lo mismo sucede con las identidades sexuales no normativas, desde principios de la década actual. En esta asimilación interesada de la libertad sexual con los valores europeos, que invisibiliza la homofobia, la lesbofobia y la transfobia institucional y social presente en nuestras sociedades, se normaliza la pertenencia de los antes "desviados" a la comunidad, siempre y cuando sean blancos. El homonacionalismo, concepto tomado de Jasbir K. Puar, se alinea con las demandas de los movimientos LGBTI desde posiciones racistas y islamofóbicas (Puar, 2007), basándose en la premisa de que las personas migradas importan homofobia a las sociedades occidentales, donde prima la igualdad entre las personas. Más allá de discursos teóricos, bien vale una prueba del compromiso de la derecha y la extrema derecha centroeuropea con los derechos de las personas LGTBI: el 2 de julio de 2017, cuando el parlamento alemán aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, los seis parlamentarios musulmanes, todos miembros de partidos

55. Centre for Feminist Foreign Policy, "The populist right in Western Europe. Women's bodies and national belonging", 19/05/2018: <https://centreforfeministforeignpolicy.org/journal/2018/5/6/the-populist-right-in-western-europe-part-1-womens-bodies-and-national-belonging>

56. Estadísticas del Ministerio de Igualdad español. Víctimas mortales por violencia de género según la nacionalidad del agresor, 2013-2018: http://www.inmujer.es/estadisticasweb/10_Violencia/10_1_VictimasMortalesporViolenciadeGenero/w809.xls

de izquierdas, votaron a favor,⁵⁷ mientras que la conservadora CDU, encabezada por Angela Merkel, votó en contra y el partido fascista AfD, que oscila entre la tercera y la cuarta posición en la actualidad, anunció una demanda judicial contra la nueva ley.

En el contexto actual, una potencial regresión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI es más que probable, y así lo prevén los organismos europeos de defensa de derechos, como demuestra el hecho de que el coloquio anual de 2018 de la Agencia europea para los Derechos Fundamentales (FRA) se focalizara en los "Derechos de las mujeres en tiempos turbulentos".

Dimensión económica de la inseguridad y sostenibilidad de la vida

La lucha contra el terrorismo, el rearme bajo la justificación del miedo a la Rusia de Putin y la militarización y tecnificación de las fronteras europeas exteriores, interiores y en terceros países, ha generalizado un alza de la inversión en seguridad y defensa en todo el continente. Si el gasto militar en el continente europeo –342 billones de dólares en 2017– decreció un 2,2% respecto al 2016 por una reducción del presupuesto de Rusia, la Comisión Europea aprobaba en noviembre de 2018 un Fondo de Defensa Europeo de 13 billones de euros para el periodo 2021-2027.⁵⁸ La organización británica Statewatch, que monitorea la securitización de Europa y sus efectos, asegura que la priorización del gasto militar en la Unión Europea conllevará recortes en los fondos de cohesión y para la agricultura, así como en programas de ayuda exterior.⁵⁹ Además, advierte de la introducción en varios programas civiles –desde fondos estructurales a fondos regionales de infraestructuras, transportes o Erasmus Plus– de criterios y prioridades que responden a los intereses de la industria militar. Asimismo, el nuevo presupuesto a debate propone triplicar en este periodo los fondos destinados a seguridad y control de fronteras,⁶⁰ incluyendo la externalización del "trabajo sucio" de las fronteras europeas a países terceros, mientras las medidas de austeridad estrangulan y limitan el gasto público y el gasto social en varios países europeos, especialmente en el sur de la Unión Europea.

57. Independent UK, "All of Germany's Muslim MPs voted in favour of same-sex marriage", 2/07/2018: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/angela-merkel-chancellor-germany-same-sex-marriage-vote-lgbt-muslim-mps-berlin-bundestag-cdu-sdp-a7819391.html?cmpid=facebook-post>

58. Declaración de la Comisión Europea sobre el Fondo de Defensa Europeo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_en.htm

59. Comunicado de Statewatch, "The risks of the new EU Defence Fund", 15/11/2018: <http://www.statewatch.org/news/2018/nov/eu-enaat-joint-statement.pdf>

60. Transnational Institute, "How the security industry reaps the rewards of E.U. migration control", 5/06/2018: <https://www.tni.org/en/article/how-the-security-industry-reaps-the-rewards-of-eu-migration-control>

Allí donde gobierna la derecha radical o la extrema derecha, además, estos gobiernos son abanderados de un lenguaje bélico con claras lecturas de género y de un modelo de masculinidad militar muy determinado y, en el caso de Hungría y Polonia, defensores a ultranza de alianzas intervencionistas e imperialistas como la OTAN.

La Italia de Salvini y del M5Stelle

Gasto militar y social

Italia está, hoy, bajo el gobierno de Conte y Salvini, en una posición diferenciada con respecto a otros gobiernos de extrema derecha populista europeos. Por un lado, sigue siendo el cuarto país europeo que más gasta en defensa, con un aumento, además, del 4% en esta partida para 2018. Así, el presupuesto del ministerio de defensa italiano en 2018 fue de 21.000 millones de euros, un 1,2% del PIB, mientras que el gasto militar real, incluyendo otras partidas de defensa, calculada por el observatorio permanente sobre gasto militar italiano Mil€x, ha sido de 25.000 millones de euros, un 1,4 % del PIB, y este aumento de un 4%, que en el conjunto de las últimas tres legislaturas suma un aumento de un 26%.⁶¹ El coste de la adquisición de nuevo armamento también aumenta significativamente, hasta situarse en los 427 millones de euros. Pero la militarización de Italia va más allá de la apuesta por dedicar más recursos al ejército. Matteo Salvini anunciaba el verano pasado un posible retorno del servicio militar obligatorio para los y las jóvenes italianas, haciendo uso de un indudable lenguaje bélico y asegurando que "por encima de los derechos, quiero ver un retorno a los deberes".⁶² Hay que sumar la aprobación, en septiembre de 2018, de medidas para relajar la legislación referente a la tenencia de armas, abriendo la puerta a poseer con más facilidad armas como rifles de asalto.⁶³

Por otra parte, el país se encuentra inmerso en una fuerte polémica con la Comisión Europea, por la intención del gobierno italiano de incrementar el gasto público un 2,7%, aumentando a su vez el déficit del país e incumpliendo de forma abierta los "ajustes estructurales" que Europa exige a Italia.⁶⁴ Esta decisión, que es una de las grandes apuestas de Salvini para

61. Osservatorio sulle spese militari italiane, "Milex 2018: Rapporto annuale sulle spese militari italiane", Febrero 2018: <https://drive.google.com/file/d/1UDycskQrQtgJYY4H4rnf1ZK7oM7IN9xn/view>

62. Europa Press, "Salvini propone un servicio militar y civil para jóvenes en Italia", 12/09/2018: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-salvini-propone-servicio-militar-civil-jovenes-italia-20180812111734.html>

63. The New York Times, "Italy Loosens Gun Laws as Matteo Salvini Polishes His Tough Guy Image", 07/11/2018: <https://www.nytimes.com/2018/11/07/world/europe/italy-gun-laws-matteo-salvini.html>

64. Euractiv, "EU Commission prepares to reject Italy's budget", 9/10/2018: <https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/commission-prepares-to-reject-italys-budget/>

ganarse el favor de los italianos, va acompañada de una retórica fuertemente antieuropeísta, que acusa a la Comisión Europea de "traer la inseguridad y el miedo a Europa desde sus butacas". Recientemente, Italia ha aprobado, además, el llamado "decreto Dignidad",⁶⁵ que sanciona a las empresas que deslocalicen su producción y ataca tímidamente la temporalidad laboral, aunque también introduce rebajas en el IRPF de las rentas más altas, desplegando un proteccionismo nativista más en línea con el lema electoral con el que se presentó ("los italianos primero"), que con una transformación real del sistema económico que favorezca a los más de 5 millones de pobres que tiene Italia.

Desigualdad de género económica

Italia es el tercer país de Europa con una brecha mayor de desigualdad formal –el llamado Gender Gap– entre hombres y mujeres, y el último Gender Gap Index, publicado en 2017, la sitúa en la posición 82 de 144 países examinados.⁶⁶ La tasa de mujeres italianas en el mundo laboral es inferior al 50% y aún es más bajo en el sur del país, donde sólo un 30% de las mujeres trabajan de forma remunerada. Asimismo, las mujeres ocupan los trabajos de mayor temporalidad y precariedad y los trabajos a tiempo parcial, ya que a menudo es la única manera de conciliar el trabajo productivo remunerado con el reproductivo y las tareas de cuidado, cuestión que preocupa cuando se relaciona con el hecho de que el 67% de las mujeres trabajadoras estén en riesgo de pobreza y el 10% de las trabajadoras vivan en un hogar con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, con especial incidencia entre las madres solas.⁶⁷ Según el Gender Gap Index, aproximadamente el 62% del trabajo que las mujeres realizan cada día en Italia no es remunerado, en comparación con el 30% del trabajo de los hombres, y las italianas realizan de media 24 horas a la semana de trabajo de cuidados, doméstico y reproductivo, mientras que los italianos, de media, dedican 9 horas.

Un factor de empobrecimiento de las mujeres se vincula, precisamente, a esta asunción naturalizada de las tareas de cuidado y crianza. Tras la baja de maternidad de tres meses, cada padre y madre disponen de seis meses de baja adicional al 30% del salario, en una rebaja del subsidio maternal en la que no se compensa el valor económico del trabajo de cuidados y reproduc-

tivo y que, además, actúa como factor de empobrecimiento en el núcleo familiar. Eminentemente, hacia las mujeres, ya que únicamente un 8,6% de los hombres hacen uso de esta baja de seis meses.⁶⁸

Por otra parte, la respuesta del Comité de la Convención de las Mujeres (CEDAW) al último informe periódico de Italia, en 2017, expresa la preocupación del organismo internacional por los efectos perjudiciales que las políticas de austeridad –y los recortes y privatizaciones asociadas a ellas– han tenido sobre las mujeres en todas las esferas de la vida.⁶⁹ Como efecto directo de la crisis económica y los recortes, la tasa de paro se dobló, pasando del 6,8% al 11,3%, con el paro juvenil disparándose al 37,2%, y los índices de pobreza se incrementaron del 3,1% al 7,6%, según datos de la OCDE.⁷⁰

Sin embargo, en el llamado "acuerdo de gobierno del cambio" firmado por el M5S y la Lega, las referencias a las mujeres se limitan a la sección donde se habla de la familia y la natalidad, con propuestas como ayudas en el acceso a guarderías en función de la renta "para las familias italianas" y heterosexuales, como dejaba claro el ministro de Familia, el ultracatólico y ultraderechista Lorenzo Fontana, asegurando que el gobierno sólo ayudará a familias "naturales" en las que los niños tienen "un padre y una madre",⁷¹ excluyendo así de las ayudas las familias monoparentales y monomarentales o del mismo sexo.

La Hungría de Viktor Orban

El actual gobierno húngaro ha hecho de la defensa interior su absoluta prioridad, anunciando programas de inversión en armamento encaminados a lograr el encargo de la OTAN de aumentar el gasto militar hasta el 2% en 8 años. Esto implicará doblar el presupuesto destinado a defensa, que en 2017 fue de 1.415 millones de euros.⁷² El objetivo es, según el ministro de Defensa húngaro, construir un ejército competitivo a nivel regional, bajo la consigna de que "una Hungría fuerte no existirá sin un ejército fuerte".⁷³

65. Boletín Oficial de la República Italiana, texto del "Decreto dignidad", 9/08/2018: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg>

66. World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2017: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

67. Oxfam International, "Raising their voices against precariousness: women's experiences of in-work poverty in Europe", septiembre 2018: https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/full_report_raising_voices_eng_final.pdf

68. Estudio comisionado por el Parlamento Europeo, "Backlash in Gender Equality and Women's and Girls' Rights", junio 2018: <https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/07/Studiu-ref.-egalitatea-de-gen-%C8%99i-drepturile-fetelor-%C8%99i-femeilor-%C3%AEn-UE.pdf>

69. Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Italia, 24/07/2017: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fITA%2fCO%2f7&Lang=en

70. Datos OCDE sobre desigualdad y pobreza: <http://www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm>

71. Broadagenda, U. of Canberra, "Sexism and politics in Italy: Will anything change?", 26/07/2018: <http://www.broadagenda.com.au/home/sexism-and-politics-in-italy-will-anything-change/>

72. Base de datos del SIPRI sobre gasto militar: <http://visuals.sipri.org/>

73. About Hungary, "Increasing the defense budget: "A strong Hungary cannot exist without a strong military", 7/06/2018: <http://abouthungary.hu/blog/increasing-the-defense-budget-a-strong-hungary-cannot-exist-without-a-strong-military/>



En cuanto al gasto social y de género, desde el 2011-2012 se han llevado a cabo reformas constitucionales y del Estatuto de los Trabajadores que eliminan o obvian las referencias a la igualdad salarial, y alejan del foco este concepto para trasladarlo a la familia, obviando que la brecha salarial se ha mantenido en una diferencia de entre el 15 y 20% de diferencia entre hombres y mujeres.⁷⁴ En cuanto a la diferencia de género en la percepción de pensiones, esta se mantiene cerca del 15%.

Asimismo, la perspectiva familista, que el gobierno húngaro se jacta de haber introducido en lugar de la perspectiva de género, haciendo de las políticas demográficas la prioridad absoluta, ha acabado incrementando las desigualdades, destinando recursos sin precedentes a familias con rentas altas y medias, a través de reformas impositivas y del subsidio por maternidad, mientras las familias con rentas más bajas se han visto impactadas por los recortes a los subsidios universales y del sistema de seguridad social, que excluye también grupos vulnerables, como las migradas y otros.⁷⁵ En este sentido, también se han eliminado las pensiones por discapacidad.

74. UN Human Rights Council, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica acerca de su misión a Hungría: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/097/68/PDF/G1709768.pdf?OpenElement>

75. Friedrich Ebbert Stiftung, "Welfare for the Wealthy: The Social Policy of the Orbán-regime, 2010-2017", marzo 2018: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/14209.pdf>

La Polonia del Partido de la Justicia y la Ley

Polonia es uno de los países europeos con más porcentaje del PIB dedicado al gasto militar (1,96% el 2017), una tendencia que se verá aumentada en los próximos años por los planes del gobierno actual de alcanzar, en 2020, el 2% del PIB demandado por la OTAN.⁷⁶ El año pasado, el presupuesto militar del país fue de 10.010 millones de dólares, según el SIPRI. Asimismo, el gobierno de Polonia implementa políticas abiertamente militaristas, bajo la justificación de la amenaza que supone la Rusia de Putin, como la creación de unas fuerzas de defensa territoriales –un cuerpo auxiliar militar de voluntarios, algunos miembros de grupos paramilitares–, que en 2019 integrarán 53.000 personas más.⁷⁷

Se calcula, sin embargo, que unos 15 millones de personas, el 17% de la población en Polonia, están en riesgo de pobreza, según datos del banco mundial. Esta pobreza se agudiza especialmente en el caso de las mujeres y se manifiesta en el 27% en familias monoparentales, generalmente compuestas por una

76. Defence24, "Poland About to Increase Its Defence Expenditure up to the Level of 2.5% of GDP. A New Bill Introduced", 24/04/2017: <https://www.defence24.com/poland-about-to-increase-its-defence-expenditure-up-to-the-level-of-25-of-gdp-a-new-bill-introduced>

77. The Conversation, "In Central Europe, militarised societies are on the march", 28/09/2017: <https://theconversation.com/in-central-europe-militarised-societies-are-on-the-march-84164>

mujer y sus hijos. Como en el resto de los casos, las mujeres polacas presentan niveles más altos de desempleo y más dificultades para encontrar trabajo y reintegrarse al mercado de trabajo, mientras que la feminización de la pobreza se manifiesta, también, en salarios más bajos, siendo la brecha salarial de un 8%, la brecha global en el mundo laboral de un 30% y la diferencia entre pensiones entre un 20% –25% de diferencia respecto a los hombres.⁷⁸

Finalmente, y por poner un ejemplo de otro de los países europeos que ya cuenta con un gobierno de coalición con la extrema derecha, Austria aumentó en 2017 su gasto militar por segundo año consecutivo, dedicando 2.970 millones de dólares, el 0,73% de su PIB,⁷⁹ mientras que gasta el 3% de su PIB en las familias, cifra por encima de la media de la OCDE. Aunque es pronto para sacar conclusiones de la influencia del FPÖ en el gobierno austríaco en términos de género y derechos de las mujeres, informes como el reciente estudio "Blacklash in Gender Equality and Women's and Girls' Rights", publicado en junio de 2018 por encargo del Parlamento Europeo, advierten de que hay señales preocupantes,⁸⁰ como la rebaja de medio millón de euros en la partida del Ministerio de las Mujeres en los presupuestos 2018–2019, en comparación con el año anterior, y un aumento de los ataques los derechos de las mujeres que –por ahora– se limitan al nivel discursivo. La campaña contra la "ideología de género" se ha intensificado en Austria, a través de grupos que rechazan el discurso feminista y los estudios de género, y existe una presión fuerte por parte de grupos de padres ultraconservadores contra la introducción de la diversidad sexual y de género en el programa de educación sexual que se implementa desde 1990. Sin embargo, los efectos de la presencia de la extrema derecha en el gobierno aún son poco visibles.

Dimensión comunitaria y social de la inseguridad

La militarización y la fortificación de las fronteras, estrategia que es ahora mismo una de las principales fuentes de inseguridad comunitarias y sociales en el continente europeo, no es, sin embargo, la única. La vigilancia extrema de ciertas comunidades culturales y religiosas, en nombre de la llamada "lucha contra el terrorismo", y la discriminación de comunidades como los Rrom (el pueblo gitano), continúan vigentes en Europa, con una persecución especialmente destacada en Italia, Hungría y Francia. La inseguridad comunitaria y social impacta especialmente sobre las mujeres y las personas LGBTI migradas y racializadas en ámbitos

78. European Commission, "2017 Report on equality between women and men in the EU": https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf

79. Dades SIPRI (ref.72)

80. European Commission (ref. 78)

como la protección hacia las violencias y la discriminación en el acceso a la sanidad pública, situación que ha sido objeto de polémica en países como España.

Lejos de los valores de igualdad y libertad que podían abrir margen para concebir la seguridad como algo más holístico, ahora mismo, en Europa, la seguridad está estrechamente definida por las líneas que marcan las fronteras de la Unión Europea. La Estrategia de Seguridad de la UE es clara en cuanto al lenguaje: el orden securitario europeo está amenazado por el terrorismo y la llegada de personas provenientes del Norte de África y Oriente Medio.⁸¹

La migración es un fenómeno securitizado, que se concibe no como la consecuencia a gestionar de una crisis global, sino como una amenaza a la existencia misma de Occidente. Si, bajo la Europa de los gobiernos conservadores y socialdemócratas de las últimas dos décadas, ha tenido lugar un proceso de militarización de fronteras y del territorio, que no sólo afecta a las personas que llegan a Europa, también a todas aquellas que se ven impactadas por la deshumanización que cala en nuestras sociedades, el auge de la extrema derecha bebe de esta deshumanización y régimen del miedo para hacer políticas abiertamente racistas, hasta el límite de contemplar la muerte de miles de seres humanos como un balance compensatorio, sin luto oficial, sin que ello suponga una conmoción moral para la sociedad.

En cuanto a impactos materiales de las políticas fronterizas, sobre todo de Italia y España, y en los últimos años también de países como Hungría y Bulgaria, el cierre de rutas seguras de migración y la securitización de las fronteras europeas han favorecido el negocio de los traficantes de personas, obligando a los y las migrantes a cruzar por entradas más inseguras.⁸² Estas políticas implican la expansión de las fronteras europeas a los países que hacen de frontera exterior –Marruecos, Libia, Turquía– y que mantienen acuerdos con España, Italia o la propia UE. Todo ello genera inseguridades específicas de género, que han multiplicado la exposición de las mujeres y niñas a las violencias.⁸³

Según un informe de Amnistía Internacional, los gobiernos y organismos de ayuda humanitaria fallan es-

81. Agenda Europea en seguridad hacia una Unión Securitaria Efectiva, 20/4/2016: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20160420/communication_eas_progress_since_april_2015_en.pdf

82. TNI y Stop Wapenhandel, "Guerras de frontera – Los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa", en castellano en <https://www.tni.org/guerras-de-frontera> y en inglés en www.tni.org/borderwars

83. Journal of Refugee Studies, "Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean 'Crisis'", Volume 29, Issue 4, 1 December 2016: <https://academic.oup.com/jrs/article/29/4/568/2453266>

trepitosamente a la hora de garantizar la protección a mujeres refugiadas de Siria e Irak. Las mujeres y niñas refugiadas sufren violencia, agresiones, acoso y explotación sexual en todas las etapas del viaje, y también una vez en suelo europeo.⁸⁴ En el informe, mujeres y niñas que viajan solas o con sus hijos declaran haberse sentido especialmente amenazadas en las zonas de tránsito y los campos de Hungría, Croacia y Grecia, que no estaban adaptados a las especificidades de género.

Uno de los efectos más claros en términos de género de la militarización de fronteras es la agudización de crímenes como el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. La fortificación de las fronteras y la persecución de las personas migradas y –en el caso de Hungría, también de las personas que las ayudan⁸⁵– obstaculizan la identificación de las víctimas de este tipo de explotación, que en vez de recibir la protección que requieren, son enviadas a centros de internamiento de migrantes. Una de las poblaciones particularmente vulnerables al tráfico de personas es el pueblo gitano o Rrom, y sus menores. Esta comunidad cultural y étnica, que se cifra en 11 millones de personas, ha sido, en los últimos tiempos, objeto de una persecución y criminalización que llevó a la expulsión forzosa de 10.000 gitanos en Francia,⁸⁶ mientras que Matteo Salvini proponía en junio la creación de un censo de personas gitanas, a efectos de facilitar su deportación.⁸⁷

Asimismo, con respecto a la población racializada que vive en Europa, el señalamiento de ciertas comunidades tachadas de cuna del terrorismo yihadista impacta fuertemente en la vida cotidiana de las personas que forman parte. Uno de cada tres musulmanes, hombres y mujeres, especialmente estas últimas cuando llevan símbolos como el hiyab, aseguraban haber sufrido discriminación y acoso racista, así como redadas policiales basadas en perfil racial.⁸⁸

En el caso concreto de Italia, el parlamento del país ratificaba, en noviembre de 2018, un decreto de seguridad e inmigración, promovido por Salvini, que limita la protección de las personas migradas en situación de vulnerabilidad, suprimiendo el criterio de

protección humanitaria, que hasta ahora era una de las causas para conceder el asilo, y facilitando las expulsiones de migrantes.⁸⁹

Dimensión personal y física de la inseguridad

Una de cada 10 mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de violencia sexual desde los 15 años y una de cada 20 ha sufrido una violación, mientras que el 43% de las mujeres europeas han sido objeto de violencia y maltrato psicológico, según una encuesta de la Agencia europea por los Derechos Fundamentales (FRA), realizada en 2014 y que contiene los datos más actualizados hasta día de hoy.⁹⁰ Sólo un 14% denunció las agresiones más graves.

Al 2017, la mayoría de los miembros de la Unión introdujo nuevas medidas para combatir las violencias de género, especialmente referentes a la Mutilación Genital Femenina y al acoso, pero la pervivencia y refuerzo de estereotipos de género que encubren y perpetúan la violencia, garantizan la continuidad de la misma, tanto en general como especialmente en los países donde gobierna la extrema derecha securitaria, que transmite públicamente este discurso desde el gobierno y las instituciones.

En este sentido, Matteo Salvini, líder de la xenófoba y ultraderechista Liga (antes Liga Norte), protagonizó una fuerte polémica en plena campaña electoral, cuando en un mitin señaló una muñeca hinchable que había en el escenario asegurando que era “la doble de Laura Boldrini”, entonces presidenta de la Cámara de Diputados italiana, ex comisionada de ACNUR y muy crítica con la política migratoria europea e italiana. Lejos de disculparse posteriormente con Boldrini, que fue víctima de un fuerte acoso por redes sociales con amenazas de violación incluidas por parte de seguidores de la ultraderecha, Salvini declaró a Sky Italia que era ella “la que debía disculparse porque es racista con los italianos⁹¹”. El portavoz del parlamento húngaro por su parte aseguró públicamente que el papel principal de las mujeres es la reproducción y la maternidad y su espacio es la casa,⁹² mientras que una fuerte polémica recorrió Polonia en 2017, cuando

84. Amnistía Internacional, Las refugiadas sufren agresiones físicas, explotación y acoso sexual al atravesar Europa, 18/01/2016: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/>

85. New York Times, “Hungary criminalizes aiding illegal migrants”, 20/06/2018: <https://www.nytimes.com/2018/06/20/world/europe/hungary-stop-soros-law.html>

86. El Confidencial, “Valls, el azote de los gitanos: París ha expulsado a 10.000 desde enero”, 26/03/2013: https://www.elconfidencial.com/mundo/2013-09-26/valls-el-azote-de-los-gitanos-paris-ha-expulsado-a-10-000-desde-enero_32640/

87. ElDiario.es, “El censo de gitanos que propone Salvini es ilegal y la Justicia ya lo frenó con Berlusconi”, 21/06/2018: https://www.eldiario.es/desalambre/gitanos-propone-Salvini-Justicia-Berlusconi_0_784622060.html

88. FRA, Fundamental Rights Report 2018, junio 2018: <http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018>

89. ElDiario.es, “El Senado italiano aprueba la ley de seguridad e inmigración promovida por Salvini”, 7/11/2018: https://www.eldiario.es/sociedad/Senado-seguridad-inmigracion-promovida-Salvini_0_833267111.html

90. Fundamental Rights Agency, FRA, 2014, “Violence against women: an EU-wide survey”, Marzo 2014: <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>

91. Sky Italia, “Salvini sul palco con bambola gonfiabile: “La sosia della Boldrini”, 25/07/2016: <https://tg24.sky.it/politica/2016/07/25/salvini-bambola-gonfiabile-sul-palco-boldrini.html>

92. UN, High Commissioner for Human Rights, “UN Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice finalizes country mission to Hungary”, Maig 2016: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E>

la mujer de un político del partido en el gobierno hizo público en YouTube que era víctima de violencia de género a manos de su marido, reimpulsando el debate público sobre este tipo de violencia.⁹³

Que 1 de cada 6 italianos culpe a las mujeres de la violencia de género⁹⁴ es, sin duda, un indicador que preocuparía a cualquier gobierno, teniendo en cuenta que, en Italia, una mujer fue asesinada cada 72 horas en 2017, en total 123 mujeres muertas a manos de una persona conocida, en el 80,5% de los casos y, el 43,9% en manos de la pareja o expareja.⁹⁵ Se calcula que en Italia se han producido más de 3.000 feminicidios en los últimos veinte años y, en marzo de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba a este Estado por haber generado una situación de desprotección e impunidad en el caso de una madre y un hijo víctimas de violencia y que terminó con el asesinato del joven por parte de su padre cuando protegía a la madre.⁹⁶ También el año pasado, 4.261 personas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, aunque se calcula que la incidencia de este tipo de violencia, incluyendo el acoso, abarca casi la mitad de las mujeres italianas adultas.⁹⁷

El ministro Salvini ha declarado públicamente que impulsará que el tratamiento de la violencia contra las mujeres sea considerada "código rojo",⁹⁸ para que se le dé la máxima prioridad judicial, a la vista de las dificultades en el acceso a la justicia y la falta de capacitación, formación y especialización de los profesionales que intervienen en el circuito de las violencias y las profundas desigualdades entre las regiones, recogidas en documentos como el último "Informe Sombra" –que entidades y organizaciones de la sociedad civil realizan periódicamente para valorar la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (CEDAW). Más allá del mensaje contradictorio que emite Salvini anunciando medidas contra la violencia después de haber agredido a una mujer en campaña electoral, la tendencia xenófoba que atraviesa las políticas del actual gobierno italiano hace difícil imaginar que las nuevas medidas aborden la otra de las grandes

carencias que el informe destaca: los obstáculos en el acceso a la justicia en Italia de las mujeres migradas y de minorías como las Rrom, "como consecuencia de la criminalización de la migración y la marginalización y persecución de las minorías⁹⁹", empezando por el acceso a la justicia gratuita en los casos de mujeres indocumentadas o en situación irregular. El informe Sombra menciona, también, la desprotección de las personas LGBTI fruto, entre otros, de la falta de legislación sobre discriminación y violencia contra las identidades sexuales y de género no normativas.

Retroceso de una década en la Polonia del Partido de la Justicia y la Ley

El caso Piasecki, mencionado más arriba, supuso un antes y un después en la normalización de la violencia machista entre las mujeres polacas, implícitamente legitimada en el discurso de los políticos del partido en el gobierno, que llegaron a calificar el caso contra Piasecki de "drama familiar". Pese a la existencia de leyes contra el abuso doméstico desde el 2005, pues, la justificación de la violencia está implícita en el discurso del gobierno, que prima la defensa de los valores de la familia tradicional, y que está generando, según activistas feministas polacas, un retroceso de una década en los derechos de las mujeres desde que el Partido de la Justicia y la Ley llegó al gobierno, en 2015.¹⁰⁰

Si, según la Agencia europea para los Derechos Fundamentales (FRA), al menos 4 millones de mujeres declararon haber sido víctimas de violencia en Polonia,¹⁰¹ los políticos del partido en el gobierno niegan la magnitud de este fenómeno, reduciéndolo a un hecho aislado, bajo el argumento de que en Polonia "las mujeres son tratadas con respeto¹⁰²", y remitiendo a la efectividad de la ley. La violencia institucional en Polonia no se concreta sólo en el discurso del gobierno, sino que tiene implicaciones materiales tan extremas como la negativa a aplicar el Convenio de Estambul –el acuerdo europeo contra las violencias machistas– a Polonia, la eliminación de la financiación de las ONG dedicadas al acompañamiento de las víctimas de violencia doméstica, bajo el argumento de mantener una actividad discriminatoria para ayudar únicamente a mujeres e, incluso, las redadas policiales en las sedes de estas organizaciones, en octubre del 2017.¹⁰³ Las declara-

93. Global Dialogue, "Making Domestic Violence Visible in Poland": <http://globaldialogue.isa-sociology.org/making-domestic-violence-visible-in-poland/>

94. La Repubblica, "Violenza di genere: per 1 italiano su 6 è colpa della donna, il 35% fa appello alla prudenza quando nasce in famiglia", 22/11/2017 https://www.repubblica.it/cronaca/2017/11/22/news/vio9lenza_di_genere_per_il_16_degli_italiani_nasce_da_una_provocazione_della_donna-181840454/?refresh_ce

95. Istituto Nazionale di Statistica, cifras sobre feminicidio en Italia: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>

96. El Mundo, "Estrasburgo condena a Italia por su ineficiente lucha contra la violencia machista", 3/3/2017: <https://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/03/58b9a0ed22601dcf678b4579.html>

97. Istituto Nazionale di Statistica, cifras de violencia contra las mujeres: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>

98. The Local Italia, "Salvini: 'Code red' needed for reports of violence against women", 19/11/2018: <https://www.thelocal.it/20181119/salvini-code-red-needed-for-reports-of-violence-against-women>

99. Informe de la plataforma italiana "CEDAW work in progress" 2016-2017, "CEDAW Shadow Report": <http://www.aidos.it/wp-content/uploads/2017/06/ItalyCEDAWShadowReport.pdf>

100. Global Dialogue, "Making Domestic Violence Visible in Poland": <http://globaldialogue.isa-sociology.org/making-domestic-violence-visible-in-poland/>

101. Fundamental Rights Agency, Encuesta sobre violencia machista en Europa: <http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey>

102. Human Rights Watch, Women's Rights Division, "Poland No friend to women", 3/12/2017: <https://www.hrw.org/news/2017/12/03/poland-no-friend-women>

103. Íbid.

ciones gubernamentales atacando la Convención de Estambul también han sido constantes en Hungría.

La asociación entre la lucha por la erradicación de las violencias machistas y el ataque a los valores tradicionales y a la identidad nacional lleva a la población a la dicotomía de tener que elegir entre el "patriotismo" y el derecho a una vida libre de violencias.

Ofensiva contra el género y la lucha LGBTI en la Europa Central y del Este.

La batalla contra cualquier vestigio "de ideología de género" en la región, que funciona también como reacción de los **enfants terribles** del frente de Visegrad a los valores "liberales" asociados a la Unión Europea, y que son concebidos como ataque a la familia tradicional, se plasma en un cerco cada vez más acusado a las organizaciones y movimientos en defensa de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, y a las propias activistas.

En Italia, los impactos contra la población LGBTI no se limitan al discurso del gobierno que asocia lo natural con la heterosexualidad. Hace sólo unos días, una de las sedes del movimiento por los derechos sexuales fue atacada en Roma por un grupo fascista.¹⁰⁴ En Hungría el gobierno de Orban ha protagonizado dos polémicas que hacen visible hasta qué punto el género es enemigo simbólico de su gobierno. La primera fue cuando la decisión de la Ópera Nacional húngara de representar la obra Billy Eliot desató una purga en las principales instituciones culturales del país,¹⁰⁵ el pasado verano. La segunda, cuando Orban decidió retirar la financiación y la convalidación a los estudios de género que se impartían en dos universidades del país, porque consideraba "inaceptable hablar de género como constructo social y no del sexo como hecho biológico".¹⁰⁶ El ataque contra los estudios de género no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva generalizada contra los movimientos feminista, LGBTI y las organizaciones por los derechos de los migrantes, acusadas de "agentes extranjeros" que amenazan la soberanía húngara.¹⁰⁷ Como Polonia, el gobierno de Orban ha recortado la financiación de las organizaciones que combaten la violencia, en favor de entidades caritativas conservadoras y progubernamentales.¹⁰⁸

104. Roma Today, "Manifesti omofobi contro il Mario Mieli: 'I fascisti ci attaccano'" <http://www.romatoday.it/attualita/manifesti-omofobi-contro-il-mario-mieli-i-fascisti-ci-attaccano.html>

105. BBC, "Billy Elliot 'gay propaganda' row exposes purge in Hungary", 26/06/2018: <https://www.bbc.com/news/world-europe-44602026>

106. CNN, "Hungary's PM bans gender study at colleges saying 'people are born either male or female'", 19/10/2018: <https://edition.cnn.com/2018/10/19/europe/hungary-bans-gender-study-at-colleges-trnd/index.html>

107. News Mavens, "Eastern Europe's blitzkrieg on gender equality", 14/09/2018: <https://newsmavens.com/special-review/796/eastern-europe-s-blitzkrieg-on-gender-equality>

108. The Conversation, "How Hungary and Poland have silenced women and stifled human rights", 14/10/2016: <http://theconversation.com/how-hungary-and-poland-have-silenced-women-and-stifled-human-rights-66743>

El presidente húngaro, además, participó recientemente en la recepción de una organización internacional antiabortista y anti-LGBTI, radicada en Estados Unidos, que, entre otros, asegura que vivimos un "invierno demográfico", en el que la "pureza" de la civilización europea se ve amenazada por el aumento de la población no blanca.¹⁰⁹ En la conferencia, Orban vincula de nuevo seguridad y control de los cuerpos de las mujeres, lesbianas y trans al decir que "el interés nacional pasa por restaurar la reproducción natural".¹¹⁰

Dimensión de salud sexual y reproductiva

También en Europa la criminalización de conductas sexuales y reproductivas actúa como barrera para el pleno acceso a la salud sexual y reproductiva y sienta las bases para la discriminación en función del estatus económico, como expone el informe de Amnistía Internacional "Políticas del cuerpo: manual general sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción". La convergencia entre el auge del identitarismo blanco y la securitización de los cuerpos de las mujeres en el continente europeo bebe también de la preocupación por el descenso de la natalidad y el envejecimiento, que se traduce en una tendencia creciente de algunos gobiernos, siendo Polonia y Hungría los casos más representativos, a dificultar el acceso al aborto y a la información y educación sobre salud sexual y reproductiva, tachada de inmoral y antipatriótica.¹¹¹ Astra, una red polaca de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, advertía en 2016 del auge de una retórica y práctica contraria al derecho al propio cuerpo en la Europa central y del este, que suponía ya entonces una amenaza para las vidas y el bienestar de las mujeres y las jóvenes. Estos derechos ya no sólo están en crisis, directamente están siendo atacados prácticamente en todo el continente por las fuerzas conservadoras y antifeministas que ganan poder e influencia en varios países europeos.¹¹²

Polonia tiene, de hecho, una de las legislaciones de interrupción del embarazo más restrictivas, ya que la admite únicamente cuando es consecuencia de una agresión sexual, cuando el feto presenta malformaciones o cuando la vida de la madre está en peligro. El cumplimiento de estos supuestos, sin embargo, no es una garantía. En 2016, el gobierno polaco del ultraderechista Partido de

109. Illinois Fmily, The New Demographic Winter: <https://illinoisfamily.org/marriage/the-new-demographic-winter/>

110. Independent UK, Hungarian President Viktor Orban hosts notorious anti-LGBT hate group, 26/05/2017: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-president-viktor-orban-anti-lgbt-hate-group-iod-homophobia-gay-europe-a7758166.html>

111. Amnistía Internacional, Políticas del cuerpo: manual general sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción, 2018: <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4077632018SPANISH.PDF>

112. ASTRA Network, "ASTRA Network statement on rising threats to Sexual and Reproductive Health and Rights in Central and Eastern Europe", diciembre 2016: http://astra.org.pl/pdf/publications/ASTRA-stmt_2016.pdf

la Ley y la Justicia (PiS) intentó introducir una prohibición casi total del aborto, pero la movilización de miles de mujeres frenó la reforma. En septiembre de este año, el Consejo de Europa instó a Polonia a asegurar el acceso al aborto de las mujeres que entran en los supuestos,¹¹³ después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara este país por obstaculizar la interrupción del embarazo de una chica fruto de una violación. El Consejo criticó los intentos reiterados de restringir aún más el acceso de las mujeres al aborto legal, mediante propuestas legislativas retrógradas, como llevar a cabo investigaciones criminales por abortos naturales sospechosos, y el actual debate, generado por una propuesta del partido en el gobierno, que quiere suprimir uno de los cuatro supuestos que legalizan la interrupción del embarazo, en un país en el que se estima que cada año se realizan 150.000 abortos clandestinos,¹¹⁴ es decir, en situación de inseguridad absoluta para las mujeres, con miles más no contabilizadas que viajan a practicarse una interrupción del embarazo en Eslovaquia, más garantista que el país vecino.

Pero Polonia no es el único caso. También en España, el gobierno ultraconservador del Partido Popular intentó restringir el aborto y devolverlo a la ley de supuestos de 1985, introduciendo obstáculos administrativos para acceder a los servicios y exigiendo el consentimiento parental a las menores de 18 años, premisa que sigue vigente. A pesar de que, de nuevo, la presión de la movilización de las mujeres en las calles frenó esta contrarreforma, la derecha ultraconservadora, encabezada por el Partido Popular de Pablo Casado, ha retomado la cuestión del aborto, amenazando con un retorno a la anterior ley de supuestos, bastante más restrictiva, en caso de que gane las próximas elecciones.

Si en Italia Salvini aseguró que no tocarán la ley de interrupción del embarazo aprobada en 1978, el actual ministro de Familia, Lorenzo Fontana, que es considerado el miembro más ultraderechista del gobierno recriminaba recientemente a sus socios del Movimiento 5 Stelle que pretendan liberalizar la ley actual, blandiendo el discurso de la defensa de los derechos del feto.¹¹⁵

Más allá de la legislación, la realidad del acceso a una interrupción del embarazo en Italia empieza a toparse con la presencia del movimiento antiabortista, al que pertenece Fontana, con la reestructuración neoliberal

del sistema de salud y con la expansión de la objeción de conciencia entre los profesionales médicos. De hecho, se calcula que 7 de cada 10 ginecólogos italianos se niega a practicar abortos.¹¹⁶

Por otra parte, tanto Polonia como Hungría han promovido políticas de fomento de la natalidad entre determinados segmentos de la población, demonizando por el camino la educación sexual y los métodos anticonceptivos, tildándolos de "inmorales y antipatrióticos". De hecho, en Polonia, el gobierno prohibió en 2017 la venta de anticonceptivos de emergencia, restringiendo hasta el extremo su prescripción, lo que generó un impacto, entre otros, sobre mujeres supervivientes de violencia sexual y mujeres de las áreas rurales del país.¹¹⁷

En cuanto a la criminalización y securitización del VIH, un problema recurrente en todo el mundo y que presenta impactos claros en países como Noruega o Hungría, colectivos de activistas han expresado su preocupación por el procesamiento y sanción de personas para transmitir el VIH, y específicamente por el número desproporcionado de personas migradas o solicitantes de asilo imputadas por transmisión o exposición al virus, según el citado informe de Amnistía Internacional. En cuanto a la población LGBTI, y concretamente a los gays y las mujeres transexuales, con una mayor prevalencia del VIH, su acceso a la salud se ve determinado por factores como las actitudes discriminatorias, los prejuicios y el estigma por parte del personal médico, el miedo a desvelar la identidad de género u orientación sexual, la falta de conocimiento especializado en personas LGBTI y la falta de reconocimiento de las especificidades del acceso a la salud de este colectivo, así como la exclusión de algunos servicios de salud por motivos homófobos, lesbofobia o transfobia.¹¹⁸

Finalmente, en varios países europeos las personas transexuales y transgénero son aún diagnosticadas como enfermas y no reciben la atención especializada que requieren.

CONCLUSIONES

Los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI están bajo ataque. Un análisis simple de las políticas que están implementando los gobiernos de la derecha y la extrema derecha populista en Occidente, empezando

113. Center for Reproductive Rights, "Council of Europe Decision Calls on Poland to Immediately Grant Women Access to Legal Abortion Care and Services", 25/09/2018: <https://www.reproductiverights.org/press-room/council-of-europe-decision-calls-on-poland-to-immediately-grant-women-access-to-legal-abortion-law>
114. 25 years of women's hell - 25th anniversary of the Polish anti-abortion law <http://en.federa.org.pl/25yearsofwomenshell/>
115. Lega Nord, "Fontana contro i grillini: 'Vogliamo l'aborto indiscriminato': <https://leganord.org/notizie2/10898-fontana-contro-i-grillini-vogliamo-l-aborto-indiscriminato>

116. El Salto, "Siete de cada diez ginecólogos en Italia se niegan a practicar abortos", 19/06/2018: <https://www.elsaltodiario.com/aborto/no-a-la-objecion-de-conciencia-historia-de-los-derechos-reproductivos-en-italia>
117. The Guardian, "Polish government widely condemned over morning-after pill law", 26/06/2017: <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/26/polish-president-signs-off-widely-condemned-morning-after-pill-law>
118. ILGA Europe, "Health4LGBTI: Reducing health inequalities experienced by LGBTI people": <https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/health/health4lgbt>

por la cruzada contra el género, aporta una idea definida de los impactos materiales que, efectivamente, estos generan y generarán en las vidas de las mujeres y las personas LGBTI. Y, por tanto, en su seguridad económica, social, sanitaria, personal y comunitaria, que se ve atravesada por esta ofensiva patriarcal militante –parafraseando Rita Laura Segato– a nivel global, en la que la securitización y el control sexual y reproductivo se convierten en un caballo de batalla en nombre de la recuperación de la identidad nacional y el retorno a un Estado fuerte. El cuerpo es uno de los escasos espacios donde el Estado puede demostrar, todavía, capacidad de gobierno, ejercicio de poder y soberanía. Las fronteras que estos “patriotas” protegen no son, pues, únicamente geográficas, sino que el cierre –que genera consecuencias brutales para miles de seres humanos– es simbólicamente y material en la pureza identitaria y la continuidad de la hegemonía de un Norte donde las élites blancas y adineradas conserven el poder.

No es casualidad, pues, que los gobiernos de los países analizados manifiesten la voluntad de erigirse aún más barreras de entrada en sus territorios, por una parte, y por otra más barreras en el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo, bajo una justificación moral, a la vez que aprueban legislaciones que vulneran el derecho a la salud –en general y también a la salud materna infantil–, de las mujeres migradas. El control de la natalidad, del aborto y de la sexualidad son en este caso un indicador de securitización de género. Pero la ofensiva securitaria patriarcal en Occidente está generando muchos más impactos:

- Impactos derivados del aumento del gasto militar y de la inversión en armamento y en economía de guerra: proliferación de armas pequeñas y flexibilización de la posesión de armas, que tienen una incidencia directa en el riesgo de feminicidio y aumento de la inseguridad personal. Aumento de la producción y exportación de armamento militar y nuclear, con impacto en la seguridad personal y comunitaria de los países en que son utilizadas y que generan daños específicos de género en contextos de conflicto, como la sistematización y generalización de la violencia sexual, desplazamiento forzado y despojo, matrimonio y embarazos forzados, explotación sexual y ruptura de vínculos comunitarios.
- Aumento de la brecha entre ricos y pobres, con impacto global y feminización de la pobreza y de la pobreza extrema, mayor exposición a inseguridad económica, sinhogarismo, encarcelamiento y violencias agravadas por la exclusión social.
- La cruzada contra el género y la deshumanización propia de la cultura militar supondrán un refuerzo de la estructura social jerárquica y la prevalencia

de estereotipos raciales y sexistas que alimentan la discriminación, así como un aumento generalizado de las violencias en los espacios público y privado contra mujeres y personas LGBTI.

- Militarización de las fronteras, con impactos sobre el derecho a la vida y sobre todas las dimensiones de la seguridad de miles de seres humanos y daños específicos de género (tráfico de personas, desprotección, exposición extrema a agresiones y abusos sexuales, impunidad); aumento de las deportaciones, separación de familias. Vulneración del derecho a asilo y restricciones de este derecho por motivos de género o estereotipos sexuales.
- Securitización y expansión de las técnicas de vigilancia masiva, especialmente en determinadas comunidades étnicas y raciales. Terreno para discriminaciones y vejaciones, por ej. de personas transexuales y transgénero en los controles de seguridad de los aeropuertos.
- Recortes y falta de prioridad en los presupuestos de las partidas sociales (educación, salud, dependencia, alimentación), que en la práctica agravan la carga de trabajo afectivo, reproductivo y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres. Impactos de los recortes o falta de financiación de los servicios de prevención, asesoramiento, protección y acompañamiento a víctimas y supervivientes de violencia de género o de violencia homófoba, lesbófoba y transfoba.
- La obstaculización y demonización de normativas internacionales y regionales referentes a los derechos de las mujeres, como es el caso de la Convención de Estambul, y la asociación interesada de estas con un mal externo, puede suponer un enorme retroceso en materia de protección contra las violencias, con consecuencias nefastas para la seguridad y el derecho a la vida de las mujeres.
- Agravio en la situación de desventaja en el acceso a la salud de las mujeres, lesbianas, gays, transexuales e intersexuales, especialmente en personas migradas y racializadas, que no pueden permitirse pagar el coste de la sanidad en países sin un buen sistema público de salud. Mayor vulnerabilización frente a las consecuencias físicas y médicas de la violencia y el abuso: heridas, trauma, afectaciones a la salud mental, ratio mayor de consumo de alcohol y estupefacientes, enfermedades crónicas digestivas y cardiovasculares, exposición a enfermedades de transmisión sexual como el VIH, problemas perinatales y suicidio.¹¹⁹ El 16% tiene más

119. Font: Informe "Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and nonpartner sexual violence." de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2013).

probabilidades de parir a una criatura prematura o de bajo peso y dos veces más probabilidades de sufrir un aborto o de caer en una depresión.

- Criminalización de la sexualidad en general y del aborto, que genera riesgos para la seguridad, por un lado, por la persecución de prácticas homosexuales, por el otro, favoreciendo que las mujeres que quieren interrumpir el embarazo se sometan a prácticas peligrosas. Esta criminalización del aborto no sólo no evita que estos se produzcan, sino que expone a las mujeres a abortos clandestinos y practicados en condiciones de altísimo riesgo para la vida.

A la hora de hacer demandas de mayor seguridad, por lo tanto, es necesario considerar que el actor securitizador, el Estado, es, en este caso, perpetrador de violencia de género y racial institucional, por acción o por omisión, con la intención de mantener la jerarquía y el orden social, por lo que difícilmente será un aliado. Sin embargo, el contexto es, al mismo tiempo, alentador. Este ha sido el año, también, de la huelga feminista global contra las violencias de género, de las

marchas masivas de mujeres en la calle, de las campañas por el aborto en Argentina y en Irlanda, de la toma de conciencia masiva de las desigualdades que las mujeres sufren en todo el mundo. Nuevas generaciones crecen con una visión de la diversidad sexual y afectiva que difícilmente permitirá dar pasos atrás en el reconocimiento, respeto y asunción de su existencia.

En un contexto social de atomización, sólo un proyecto que pretenda restablecer todos los vínculos comunitarios, de confianza, de cuidado y afectos entre las personas podrá revertir los impactos del discurso del miedo en el aislamiento identitario y literal que éste genera, y contrarrestar la ofensiva reaccionaria. Y sólo un cambio de perspectiva integral sobre las Relaciones Internacionales y la seguridad permitirá abordar las violencias que generan las estructuras sociales y económicas globales y locales. Este proyecto, este cambio, se llama feminismo. A través del género, la clase y la raza se despliegan los dispositivos que securitizan nuestras vidas, y desde el género, la clase y la raza se construirán las barreras y las resistencias para enfrentarlos.

BIBLIOGRAFÍA

- Blanchard, Eric. M. (2003), Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory, *Chicago Journals*, Vol. 28, No. 4 (Summer 2003), pp. 1289-1312
- Booth, Ken (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, Vol. 17, No. 4, Octubre 1991, pp. 313-326.
- Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J. (1998), *Security: A New Framework for Analysis* (London, Lynne Rienner Publishers)
- Detraz, N. (2012), *International Security and Gender* (Cambridge, Polity)
- Kennedy-Pipe, C. (2007), Gender and Security a Collins, A. (ed.) *Contemporary Security Studies* (UK, Oxford University Press)
- Cockburn, C. (2004), The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace, en Giles, W. I Hyndman, J. *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones* (Los Angeles, University of California Press)
- Ellerby, K. (2015). "(En)gendered security? Gender Mainstreaming and Women's Inclusion in Peace Processes" a Olsson J & Gizelis T-I. (2015). pp 185-210.
- Farris, S. (2017), *In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism* (Durham, Duke University Press)
- Foessel, M. (2011), *Estado de vigilancia: crítica de la razón securitaria*, (Madrid, Lengua de Trapo)
- Gama, F. (2016), The Racial Politics of Protection: A Critical Race Examination of Police Militarization, 104 *Calif. L. Rev.* 979.
- Garbagnoli, S i Prearo, M. (2017), *La croisade «anti-genre». Du Vatican aux manifs pour tous.* (Paris, Éditions Textuel)

- Hagen, J.J. (2016), Queering women, peace and security. *International Affairs*, Volume 92, Issue 2, March 2016, pp. 313-332
- Hoogensen, G. i Rottem, S. (2004), Gender identity and the subject of security. *Security Dialogue*, Volume 35, Issue 2, pp. 152-171
- Job, B. L. (1992), *The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States* (Boulder, Lynne Rienner)
- Lorey, I. (2016), *Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad* (Madrid, Traficantes de sueños)
- Mendia, I. (2013), Feminismo y Seguridad Humana: Encuentros y desencuentros en Pérez de Armiño, K. I Mendia, I. (eds.) *Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político*, (Madrid, Tecnos).
- Ní Aoláin, F., Haynes, D. I Cahn, N. (2011), *On the Frontlines. Gender, War, and the Post-Conflict Process* (UK, Oxford University Press)
- Pérez de Armiño, K. (2013), Seguridad Humana y estudios críticos de seguridad. De la cooptación a la emancipación a Pérez de Armiño, K. I Mendia, I. (eds.) *Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político*, (Madrid, Tecnos).
- PNUD (1994), Informe sobre Desenvolupament Humà
- Puar, J.K. (2007), *Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times*. (Durham, Duke University Press)
- Segato, R. L. (2016), *La guerra contra las mujeres* (Madrid, Traficantes de sueños)
- Sjoberg, L. (2010), *Gender and International Security: Feminist Perspectives* (New York, Routledge)
- Spike Peterson, V. (1992), *Gendered States. Feminist (re)vision of International Relations Theory* (Boulder, Lynne Rienner)
- Spike Peterson, V. (2003), *A Critical Rewriting of Global Political Economy: Integrating Reproductive, Productive and Virtual Economies* (London, Routledge)
- Spike Peterson, V. (2018), The Gendered Political Economy of Insecurity en Gentry, C. E., Sheperd, L i Sjoberg, L. (eds.) *Routledge Handbook of Gender and Security* (UK, Routledge)
- Stokes, W. (2014), Feminist Security Studies en Hough, P., Moran, A i altres (eds.), *International Security Studies: Theory and Practice* (London, Routledge)
- Tickner, J.A. (1992), *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security* (Nova York, Columbia University Press).
- True, J. i Tanyag, M. (2018), Violence against Women/Violence in the World: Toward a Feminist Conceptualization of Global Violence, en Gentry, C., Sjoberg, L i Sheperd, L. (coord.) *Routledge Handbook of Gender and Security* (London, Routledge)
- Wæver, O. (1995), Securitization and Desecuritization en Lipschutz, R. (ed.) *On Security* (Nova York, Columbia University Press)
- Wadley, J. D. (2010) Gendering the state: performativity and protection in international security, en Sjoberg, L. (coord.) *Gender and International Security: Feminist Perspectives* (New York, Routledge)
- Walt, S. (1991), The Renaissance of Security Studies, *International Studies Quarterly*, Volume 35, Issue 2, 1 June 1991, pp. 211-

GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE SE USAN DE FORMA RECURRENTE

<p>Género: El género es una construcción cultural que clasifica y categoriza a los individuos a través de su sexualidad y, al mismo tiempo, es un sistema de relaciones de poder desiguales entre la masculinidad y la feminidad. Debido a que es una construcción funcional y maleable, en palabras de la filósofa Teresa de Lauretis, que funciona a través de simbolismos, representaciones, valores y estereotipos, el significado de lo que implica ser y comportarse como "un hombre" o "una mujer", dependerá del momento histórico, económico, político y cultural. Es funcional en la medida que responde a la necesidad de dotar a los considerados hombres y mujeres de funciones sociales concretas a la sociedad, a través de la transmisión cultural, de la educación y la socialización o de la fuerza y la coacción.</p>
<p>Identidad de género: identificación con uno u otro género o con ninguno en concreto.</p>
<p>Feminismo(s): Teoría política y práctica cotidiana que busca erradicar la desigualdad y la discriminación por motivos de género, así como desmontar las estructuras sociales, económicas y culturales que sostienen esta subordinación. Se utiliza en plural para mostrar la diversidad de corrientes teóricas que acoge este término.</p>
<p>Transsexuales/ Transgénero: Las sociedades patriarcales sexuan a los individuos, organizándolos socialmente en función de sus genitales en dos categorías estancas –"hombre" y "mujer"– y mutuamente excluyentes, que dejan fuera múltiples cuerpos, lo que se llama "binarismo sexual". Estas exclusiones se manifiestan, por ejemplo, en la realidad de las personas transsexuales, que se identifican con una identidad de género diferente a la que se les asignó al nacer (Fundación Triángulo), o transgénero, es decir, que no identifican con el sexo asignado al nacer pero se introducen deliberadamente en una ambigüedad que supera las normas convencionales de los géneros masculino y femenino.</p>
<p>Intersexuales: Para teóricas de la diversidad como Anne Fausto-Sterling, el sexo no es dicotómico, sino que hay un continuo entre ambas categorías, y personas que no se incluyen en ninguno de los dos cajones, y que han nacido con características físicas, sexuales o hormonales de ambos sexos. Por lo tanto, el sistema sexual dualista (dos únicos sexos, hombre y mujer) no es adecuado para representar el espectro entero de la sexualidad humana o de la existencia sexual humana.</p>
<p>Personas LGBTI, identidades no normativas o disidencias sexuales: El término personas LGBTI engloba las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transsexuales/ transgénero o Intersexuales que configuran su identidad social y política a través de su orientación sexual o identidad de género. Se les considera disidencia sexual o identidades no normativas porque huyen del binarismo sexual (ver: transsexuales / transgénero) y de la norma heterosexual, que naturaliza la heterosexualidad como única orientación sexual y afectiva correcta y ajustada a la norma social, estigmatizando la homosexualidad y otras prácticas consideradas "anormales" que atentan contra "el orden natural de las cosas".</p>
<p>Racialización/ Personas racializadas: Proceso de identificación y de estigmatización social derivado del sistema colonial europeo, en el que determinados cuerpos asociados con grupos raciales son considerados no ciudadanos y en la justificación de diferentes formas de violencia, intolerancia, humillación y explotación (Tijoux, ME y Palominos, S. (2015). Un ejemplo es la dificultad de las personas con nombres árabes para alquilar una vivienda en algunos países occidentales, o los dispositivos policiales que detienen e identifican las personas en la calle en función del color de su piel. Interacciona con el género de varias maneras, por ejemplo, a través de la sexualización de algunos grupos, como de las mujeres afrodescendientes.</p>

INFORME Núm. 22

La política militar del gobierno Rajoy

Tomàs Gisbert, Maria de Lluç Bagur, Gemma Amorós
Febrero de 2014

INFORME Núm. 23

Drones militares. La guerra de videojuego con víctimas reales

Jordi Calvo, Anna Escoda, Carles Blanco
y Gabriela Serra · Marzo de 2014

INFORME Núm. 24

Exportaciones españolas de armamento 2004-2013. ¿Promueve el gobierno exportaciones ilícitas de armamento?

Tica Font, Eduardo Melero, Camino Simarro
Julio de 2014

INFORME Núm. 25

Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar. Análisis del presupuesto de Defensa español del año 2015

Pere Ortega, Jordi Calvo Rufanges
Diciembre de 2014

INFORME Núm. 26

Fraude e improvisación en el gasto militar. Análisis del presupuesto de Defensa español del año 2016

Pere Ortega, Xavier Bohigas
Octubre de 2015

INFORME Núm. 27

Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. Alimentando conflictos en Oriente Medio

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro
Diciembre de 2015

INFORME Núm. 28

Los bancos que invierten en armas. Actualización de la financiación de armamento nuclear, de bombas de racimo y de las principales industrias militares españolas (2011-2016)

Jordi Calvo Rufanges
Junio de 2016

INFORME Núm. 29

Exportaciones españolas de armamento 2006-2015. Armas españolas utilizadas en los conflictos de Oriente Medio

Tica Font, Eduardo Melero
Noviembre de 2016

INFORME Núm. 30

Género y cultura militar

Nora Miralles Crespo
Noviembre de 2016

INFORME Núm. 31

La incorporación de la mujer en el ejército español. Opacidad, machismo y violencia

María de Lluç Bagur
Noviembre de 2016

INFORME Núm. 32

Armas europeas que alimentan conflictos. Conflictos de los que huyen los refugiados. Análisis de las exportaciones de armas desde la Unión Europea a países en conflicto o tensión con refugiados y desplazados internos 2003-2014

Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa Ruiz Benedicto,
Edgard Vega Vargas
Junio de 2017

INFORME Núm. 33

La burbuja de las armas y la industria militar en España. Los Programas Especiales de Armamento

Pere Ortega
Junio de 2017

INFORME Núm. 34

Los despropósitos del gasto militar. Análisis del presupuesto de defensa de España de 2017

Pere Ortega, Xavier Bohigas, Xavier Mojal
Junio de 2017

INFORME Núm. 35

Levantando muros. Políticas del miedo y securitización en la Unión Europea

Ainhoa Ruiz Benedicto, Pere Brunet
Septiembre de 2018

Amb el suport de:



**Generalitat
de Catalunya**



**Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament**